

LEGALIDAD

DERECHO Y SOCIEDAD



Memorias del Tercer Evento Científico de la
Fiscalía General de la República



www.fgr.gob.cu



**[www.facebook.com
/FGRCuba](http://www.facebook.com/FGRCuba)**

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A SU ALCANCE



**[www.twitter.com/
@FGR_Cuba](http://www.twitter.com/@FGR_Cuba)**



YouTube

**Fiscalía General de la
República de Cuba**

LEGALIDAD DERECHO Y SOCIEDAD

No 1 • Marzo • 2018

PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA

DIRECTOR EJECUTIVO

MSc. Yamila Peña Ojeda

CONSEJO DE REDACCIÓN

MSc. Caridad Sabó Herrera

MSc. Osmín Álvarez Bencomo

MSc. Fernando Rodríguez Infante

Lic. Miguel Ángel García Alzugaray

REDACCIÓN, EDICIÓN Y CORRECCIÓN

Lic. Jessica Rivero Rodríguez

FOTOGRAFÍA

Adrián Lago del Valle

Carlos Pujols Santana

DISEÑO GRÁFICO

Lic. Jessica Rivero Rodríguez

DIRECCIÓN

Calle 34 No. 1801 e/. 3ª y 5ª.

Miramar, municipio Playa, La Habana.

CP 11300

TELÉFONO

(537) 206 1034

E-MAIL jessica@fgr.gob.cu

RNPS: 0653

ISSN: 1819-6543

La revista Legalidad, Derecho y Sociedad constituye la publicación oficial de la Fiscalía General de la República de Cuba, emitida con una frecuencia cuatrimestral, como continuidad de la revista Legalidad Socialista. Es un espacio donde se presentan artículos y ponencias, cuyos autores están fundamentalmente vinculados al sector jurídico, así como noticias y secciones con informaciones actualizadas de interés social.

El Consejo de Redacción posee la potestad para realizar cambios relacionados con la estructura, extensión, redacción y estilo de los trabajos, en función de elevar la calidad de los contenidos a publicar.

Los interesados pueden enviar sus trabajos, opiniones y sugerencias a la Redacción de la revista.

Nota al Lector

pág. 3

NOTICIAS

La rendición de cuenta en imágenes

pág. 6

Compromiso para retribuir con nuestro trabajo

pág. 9

Fomentando la integración

pág. 11

MEMORIAS DEL TERCER EVENTO CIENTÍFICO

Espacio de debate

pág. 15

Palabras de apertura

pág. 17

Relatoría del Tercer Evento Científico Nacional de la Fiscalía General de la República

pág. 18

Convocatoria para las jornadas y eventos científicos en el 2019

pág. 22

Trabajos premiados

pág. 24

RESUMEN DE LAS PONENCIAS DEL TERCER EVENTO CIENTÍFICO

pág. 25

PONENCIAS

pág. 57

Glosario de términos

pág. 67

¿Qué debatiremos en Ciencias Penales 2018?

pág. 68

Sabías qué?

pág. 70

NOTA AL LECTOR

El presente número de la Revista “Legalidad, Derecho y Sociedad”, publicación oficial de la Fiscalía General de la República de Cuba, dedica sus páginas al Tercer Evento Científico de la Fiscalía General de la República, que sesionó los días 14 y 15 de noviembre de 2017, en el Centro de Convenciones de Cojímar.

Agradecemos y brindamos nuestras más sinceras felicitaciones a todos los participantes en este evento, especialmente a los que con sus excelentes intervenciones realizaron importantes aportes al mismo.

Dicho espacio constituye la antesala del XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales y al Segundo Evento “Legalidad, Derecho y Sociedad”, a efectuarse del 14 al 16 de marzo de 2018, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Devenido en uno de los más prestigiosos foros científicos internacionales del Derecho en Iberoamérica, este evento internacional contará con la presencia de reconocidos profesionales del Derecho y de otras especialidades de diversas latitudes, que intercambiarán experiencias y conocimientos relacionados con el Derecho Penal y su vinculación con la Protección Jurídica de los ciudadanos, especialmente de menores de edad, las mujeres y la familia.

Esta edición especial invita a la integración para brindar respuestas más justas a las demandas de los pueblos desde nuestro quehacer jurídico, y a los retos aún por enfrentar.

Ofrecemos, desde este espacio, a todos los participantes un cordial saludo y los invitamos a compartir las sesiones de trabajo del encuentro, a disfrutar de la hospitalidad del pueblo cubano y aunar esfuerzos para garantizar cada día, un sistema de justicia penal con un mayor contenido ético, que coloque en el centro de su actividad la defensa de la sociedad, sin detrimento de las garantías y derechos individuales de los ciudadanos.

Fraternalmente,

Darío Delgado Cura
Fiscal General de la República



LA RENDICIÓN DE CUENTA EN IMÁGENES

El Stand

El 21 de diciembre de 2017, la Fiscalía General de la República rindió cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre la gestión desarrollada en los últimos cinco años.



Los “Pequeños Fiscales”

Una bella experiencia para los diputados e invitados, la presentación de los Círculos de Interés “Pequeños Fiscales” de Cienfuegos y Guantánamo, durante las jornadas de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.



Los integrantes junto a la General de Brigada Delsa Esther Puebla Viltre (Tete)





Durante su presentación en la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer.

Nuestras publicaciones

En el Stand se presentaron las publicaciones de las fiscalías del país, una muestra de lo que en materia de comunicación realizan para los trabajadores y los ciudadanos, en aras de contribuir a la educación jurídica.



RETRIBUIR con nuestro TRABAJO

Humanizar y hacer más eficiente la labor de sus trabajadores es un propósito de la Fiscalía General de la República, en aras de cumplirlo realiza disímiles acciones, ejemplo de ello es la entrega de 369 motos y motorinas eléctricas en todo el país, con énfasis en los órganos municipales.

Los medios de transporte se otorgaron en actos que se realizaron en todas las fiscalías provinciales y en la sede central, como parte de las celebraciones por el 44 aniversario del Órgano.

Los beneficiados agradecieron, a la institución y a la dirección del país, por continuar apoyando en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, lo que se

traduce en un cumplimiento más efectivo de sus funciones y una justicia más ágil.

Estas acciones también son muestras de la confianza y responsabilidad que deposita la Revolución en el Órgano, por lo que constituye un compromiso para sus trabajadores el retribuirlo con disciplina, responsabilidad y entrega insoslayable para continuar defendiendo, en todos los escenarios, las conquistas logradas.

En los actos participaron funcionarios de los comités provinciales del Partido y de los consejos de la Administración Provincial, Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, miembros de los consejos de Dirección y trabajadores.



En el Órgano Central



Fiscalía Provincial de La Habana



Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba



Fiscalía Provincial de Las Tunas



Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila



Fiscalía Provincial de Guantánamo



Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus

FOMENTANDO LA INTEGRACIÓN

Con los ministerios públicos, fiscalías o procuradurías generales de 15 países, de América Latina, Asia, África y Europa, ha firmado la Fiscalía General de la República de Cuba instrumentos de cooperación bilateral. Estos incluyen acuerdos y memorándums, así como sus programas de cooperación, donde se establecen las acciones y actividades a realizar en nuestro país y el exterior, para materializar los mismos. De igual forma, mantiene relaciones de colaboración con órganos de países de todo el orbe.

Estos instrumentos han contribuido a diversificar las relaciones interinstitucionales y fomentar la cooperación internacional en el marco legal, lo que se traduce en una justicia más pronta y con calidad.

A la preparación de especialistas de estas instituciones en temáticas relacionadas con la trata de personas, el cibercrimen, la capacitación, la protección a la niñez, el enfrentamiento a la corrupción y los delitos transnacionales, también han coadyuvado dichos convenios, a partir de la realización de seminarios, cursos y talleres.

Las relaciones de la Fiscalía cubana se han fortalecido y diversificado, actualmente ostenta la vicepresidencia para la región de América del Norte y el Caribe de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), de la cual es miembro fundadora desde 1954.

También nuestro Órgano integra la Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano (RECAMPI), la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organizaciones que fomentan el intercambio y las buenas prácticas entre sus miembros.

Convenios firmados



Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, firmado el 8 de marzo de 2012



Fiscalía General de la Federación de Rusia, firmado el 17 de abril de 2012



Fiscalía Popular Suprema de la República Socialista de Vietnam, firmado el 29 de marzo de 2013



Procuraduría General de la República de Angola, firmado el 7 de junio de 2013



Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, firmado el 18 de julio de 2013



Procuraduría General de la República de Mozambique, firmado el 8 de junio de 2014



Procuraduría General de la República Federativa del Brasil, firmado el 18 de julio de 2013



Fiscalía General de la República de Belarús, firmado el 16 de septiembre de 2013



Fiscalía General del Estado de la República de Ecuador, firmado el 27 de noviembre de 2014



Fiscalía Popular Suprema de la República Popular China, firmado el 17 de marzo de 2016



Fiscalía General de la República de Nicaragua, firmado el 30 de julio de 2015



Procuraduría General de la República de Panamá, firmado en mayo de 2016



Fiscalía General de la República Dominicana, firmado en junio de 2016



Procuraduría General de la República Portuguesa, firmado el 12 de octubre de 2016



Fiscalía General del Estado del Reino de España, firmado el 17 de octubre de 2016

Organizaciones para intercambiar



La AIAMP es una asociación, sin fines de lucro, integrada por 21 Ministerios Públicos y/o Fiscalías de Iberoamérica, que se rigen por sus estatutos. Fue fundada en la República Federativa de Brasil en 1954, como Asociación Interamericana de Ministerios Públicos; posteriormente, con la incorporación de España y Portugal, pasó a denominarse Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.

Entre sus objetivos se encuentra estrechar los vínculos de cooperación y preparación profesional entre sus miembros, así como promover el establecimiento de estrategias comunes para enfrentar los delitos.



La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional, IberRed, es una estructura formada por Autoridades Centrales y por puntos de contacto procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalías, Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, incluyendo Andorra, España y Portugal.

Está orientada a la optimización de los instrumentos de asistencia judicial civil y penal, y al reforzamiento de los lazos de cooperación entre nuestros países.



La Red de Capacitación del Ministerio Público Iberoamericano (RECAMPI) es una red de capacitación. Sirve de modelo de coordinación e integración iberoamericana, contribuyendo al buen funcionamiento del espacio común para fortalecer los sistemas procesales y el Estado de Derecho.

Los directores de los centros responsables de la capacitación del Ministerio Público en el ámbito iberoamericano, reunidos en el Seminario “Hacia una red de formación del Ministerio Público Iberoamericano”, celebrado del 12 al 16 de noviembre de 2001, acordaron constituir la RECAMPI.



El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional, que tiene como objetivos promover la implementación y mejora continua de políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Dicha organización está integrada por 16 países miembros. Como observadores participan diversos Estados y organismos internacionales que prestan apoyo y cooperación técnica y financiera.

Se creó, el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia.

Una jornada de intercambio de experiencias sesionó durante los días 14 y 15 de noviembre de 2017, con la realización del Tercer Evento Científico de la Fiscalía General de la República, en el Centro de Convenciones “Cojímar”, al cual asistieron más de 200 participantes de todos los órganos provinciales, la Fiscalía Militar y otras instituciones del sector jurídico.

En la inauguración participaron miembros del Consejo de Dirección Ampliado y trabajadores de este Órgano, especialmente invitados Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado; Joaquín Bernal Rodríguez, funcionario del Comité Central; Margarita McPherson Sayú, Viceministra de Educación; Liliam María Hernández Doejo, Vicepresidenta Primera de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y representantes del sector jurídico y de los ministerios del Interior y Salud Pública.

La presentación de Hortensia Bonachea Rodríguez, Fiscal Jefa de la Dirección de Formación y Desarrollo, dio comienzo a este espacio de promoción de la cultura de cooperación entre las diferentes insti-

Espacio de debate

TERCER EVENTO CIENTÍFICO NACIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL

tuciones jurídicas y otras ramas del saber que se vinculan con el trabajo de la institución.

Las ponencias que conforman el programa de este encuentro fueron seleccionadas, por su calidad e importancia para la institución, de las jornadas científicas territoriales desarrolladas en el primer trimestre del año, en Cienfuegos, Artemisa, Holguín y Ciego de Ávila.

Además, este evento resulta la antesala del XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2018 y Segundo Evento “Legalidad, Derecho y Sociedad”.



La presentación de los Círculos de Interés “Pequeños Fiscales” de Guantánamo y Cienfuegos, ganadores de los eventos territoriales, resultó uno de los momentos más disfrutados por los asistentes. Los estudiantes de secundaria básica mostraron los resultados del trabajo de formación de valores que se realiza con estos círculos, en contribución a la labor que en este sentido efectúa el Ministerio de Educación.



Los guantanameros realizaron una simulación del juicio a los asaltantes del Moncada, como homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a un año de su partida física, pues constituye una página de nuestra historia que muestra su espíritu de justicia. Todos los presentes repitieron el concepto de Revolución, demostración de su vigencia en su actuar diario.



Mientras, los integrantes del Círculo de Interés cienfueguero simularon un caso real ocurrido en el municipio de Aguada y la actuación de la fiscalía en la protección integral de los menores de edad, una de las prioridades de la institución y el Estado Cubano.

En el Tribunal No. 1 los especialistas debatieron acerca de materia penal y enfrentamiento a la corrupción administrativa; en el segundo sobre materia civil, familia y menores y en el No. 3 sobre dirección, comunicación y otros temas afines.

Con la premiación de las ponencias destacadas en cada comisión, por su calidad, actualidad, profundidad en la investigación y aplicación para el perfeccionamiento de nuestra labor; la lectura de la relatoría y la convocatoria para la próxima edición, concluyó el Tercer Evento Científico Nacional.

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

como generadora de conocimientos



Hortensia Bonachea Rodríguez, Fiscal Jefa de la Dirección de Formación y Desarrollo, pronunció las palabras de apertura

Estimados compañeros y compañeras, Delegados e invitados:

En nombre del Comité Organizador le damos la bienvenida al Tercer Evento Científico Nacional de la Fiscalía General de la República, que se desarrollará los días 14 y 15 de noviembre de 2017, con sede en el Centro de Convenciones “Cojímar”, La Habana.

Teniendo en cuenta que la investigación científica, como generadora de conocimientos, debe garantizar la evolución y el desarrollo social, constituye un derecho y un deber de los fiscales y juristas en general, contribuir a la satisfacción de las dificultades que nos plantea el entorno jurídico contemporáneo en la sociedad cubana, desde diferentes puntos de mira, hacia la construcción y aplicación de un Derecho cada vez más garantista, humano y justo. A ello, estamos convocados todos los presentes.

Este evento científico propiciará, además, el intercambio de experiencias, la promoción de la cultura de cooperación entre las diferentes instituciones jurídicas y otras ramas del saber que se vinculan con nuestro trabajo y la consolidación de mejores prácticas en el ámbito de la aplicación del Derecho en Cuba.

Intervendrán como ponentes, directivos de la Fiscalía General de la República, fiscales, fiscales militares, comunicadores y psicólogos del Órgano; así como estudiantes y profesores de la carrera de Derecho, contralores y especialistas del Ministerio del Interior.

Las ponencias que conforman el programa científico fueron seleccionadas en las jornadas territoriales, desarrolladas en el primer semestre del año en las provincias de Cienfuegos, Artemisa, Holguín y Ciego de Ávila, distinguidas por su calidad, actualidad y aplicación práctica.

Este evento, además de la importancia que reviste por su propia naturaleza y la diversidad de temas que se someterán a debate, constituye la antecámara del XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2018 y Segundo Evento Legalidad, Derecho y Sociedad de la Fiscalía General de la República, por lo que los tribunales constituidos, tienen la alta responsabilidad, además de seleccionar los mejores trabajos, el de proponer aquellos que por su calidad tienen posibilidades para integrar el programa científico del referido foro internacional.

Agradecemos a los directivos y demás trabajadores del Centro de Convenciones Cojímar por su tradicional apoyo, a todas las fiscalías provinciales y a las que fueron sedes de las jornadas territoriales, por la contribución a este tercer evento que iniciamos en el día de hoy; a los conferencistas y ponentes que se esforzaron para llegar hasta aquí, y por supuesto, a los organizadores de este, protagonizado por el Fiscal General, que cada día nos convoca e impulsa a la preparación profesional, académica e investigativa de los fiscales y demás profesionales del Órgano.

Esperamos disfruten compartir las sesiones de trabajo y que todos se sientan parte de esta gran familia que es la Fiscalía.

Les deseamos éxitos en estos dos días de jornada y una feliz estancia.

Muchas gracias.

Relatoría del Tercer Evento Científico Nacional de la Fiscalía General de la República

Centro de Convenciones “Cojímar”

La Habana. 14- 15 de noviembre de 2017

“Año 59 de la Revolución”

Distinguidos delegados e invitados:

Finalizan las jornadas del Tercer Evento Científico Nacional de la Fiscalía General de la República.

Este evento contó con la participación de más de 200 delegados e invitados, y de conjunto fiscales, psicólogos, comunicadores sociales, profesores, jueces, abogados, oficiales del Ministerio del Interior y otros profesionales, debatimos sobre diversas temáticas relacionadas con la teoría y la práctica del derecho y otras ciencias, vinculadas al trabajo de la Fiscalía, con una notable aportación de las experiencias prácticas del ejercicio profesional, en cada uno de los ámbitos del desempeño cotidiano.

Las palabras de inauguración fueron pronunciadas por la Fiscal Jefa de la Dirección de Formación y Desarrollo de la Fiscalía General, Hortensia Bonachea Rodríguez, quien destacó la importancia de la investigación científica como generadora de conocimientos, para garantizar la evolución y el desarrollo social y el deber de los fiscales y juristas de contribuir a la solución de las problemáticas que nos plantea el entorno jurídico contemporáneo.

Momento especial lo constituyó la intervención de las niñas y niños integrantes de los círculos de interés “Pequeños Fiscales” de Guantánamo y Cienfuegos, quienes, en representación de los más de 200 organizados en todo el país, mostraron parte de lo que han aprendido en su acercamiento al trabajo de nuestro Órgano.

En la primera jornada del evento se desarrolló el foro debate sobre “El Papel de la Fiscalía en la protección de los derechos ciudadanos en Cuba”, donde se recibieron más de 200 comentarios y 780 lecturas de la información publicada en el Portal Web institucional.



Participaron usuarios de todos los órganos de la Fiscalía y otras instituciones, organismos y organizaciones de nuestro país.

En la jornada inaugural, la fiscal Ana Hernández Mur, Jefa del Departamento de Análisis de la Fiscalía General, dictó la conferencia magistral “La Constitución y la Ley Electoral de la República de Cuba. Rasgos del proceso electoral y su sistema democrático”, repasando los antecedentes de la historia constitucional cubana, la que calificó de autóctona y con una vocación profunda y permanente de la libertad.

Citó ejemplos gloriosos de nuestra práctica constitucional, rememoró el proceso de creación de los órganos del poder popular y se detuvo en las particularidades de nuestro sistema electoral, convocando a los presentes a inculcar a nuestros hijos a no olvidar de dónde venimos, ni renunciar jamás a nuestros ideales de justicia.



El Dr. Rodolfo Fernández Romo, Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, dictó la Conferencia magistral sobre “Técnicas especiales de investigación criminal”. En esta, se refirió a los antecedentes de esas técnicas y a la dinámica actual, cuando ya no se limita su utilización para los delitos de tráfico de drogas, sino a todo objeto, bien o cosa de procedencia ilegal que sean motivo de tráfico. Además, abundó sobre algunas de estas técnicas especiales, destacando la interceptación de las comunicaciones y su novedosa asimilación como elemento de prueba en el proceso penal. El profesor también apuntó que las técnicas especiales de investigación criminal se legalizan, ante la imposibilidad de enfrentar el fenómeno delictivo con las técnicas criminalísticas tradicionales.

Tres intervenciones especiales tuvieron lugar durante el evento: una a cargo del Dr. Sergio Antonio Rabell Piera, Director del Instituto de Medicina Legal, quien explicó el estado de los Servicios de Medicina Legal en Cuba; otra de la especialista Joaquina Naranjo Gómez, Fiscal Jefa de la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía General, referida a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y su vigencia en la protección de niñas, niños y adolescentes en Cuba; y una de la Dra.C. Magda Luisa Arias Rivera, profesora titular del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana, quien abordó la preparación y superación de los fiscales jefes municipales, el diplomado en dirección y su impacto en el desempeño de la institución.

El Dr. Rabell Piera comentó sobre las características y organización del sistema de salud cubano, deteniéndose en las instituciones y los servicios de medicina legal en el país y las funciones que cumple el instituto que dirige, sobre el que profundizó en antecedentes, estructura organizativa, recursos humanos y proyecciones.

Por su parte, la especialista Joaquina Naranjo Gómez realizó un amplio repaso por el articulado de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, se detuvo en los principios que la inspiran y sustentan, y demostró, mediante un exhaustivo análisis, la vigencia de esos postulados en el tratamiento de la infancia en Cuba, insistiendo en el papel del fiscal en la protección de niños, niñas y adolescentes.

La profesora Magda Luisa elogió el diplomado en dirección diseñado por el Órgano para fiscales jefes municipales y reservas de cuadros, pues refirió que es necesario dedicar un tiempo a pensar cómo se dirige y a la preparación de los fiscales, para que tengan las herramientas que les permitan utilizar prácticas de dirección saludables, pues existen prácticas de dirección tóxicas que afectan los resultados del trabajo. Insistió en la necesidad de la preparación y superación de los cuadros, y que se precisa un trabajo minucioso de identificación de las necesidades específicas de cada fiscal, en lo que desempeñan un papel vital los jefes para percatarse de estas. Convocó a autoprepararse y a leer muchos libros, pues señaló que la cultura general es esencial para ejercer una buena dirección.

En las comisiones de trabajo del evento se abundó en la necesidad impostergable de modificar el control de la fase preparatoria al juicio oral, deteniéndose los ponentes en las contingencias que se les presentan a los fiscales en ese acto; también se señaló su papel en el control de la investigación y el ejercicio de la acción penal, así como en la estructura, organización y función educativa de la oratoria forense, un importante momento del proceso. Los especialistas resaltaron que lo que se lleve al proceso penal tiene que ser veraz, así como que se precisa de preparación general para realizar un buen debate público, con un lenguaje adecuado.

Se hizo un aparte para las conclusiones acusatorias del fiscal en el contexto actual del procedimiento penal militar y se abrió un amplio espacio para el análisis de los delitos asociados a la corrupción administrativa, marco en el que se explicaron ideas sobre



la preparación del fiscal para un adecuado control de los procesos penales asociados a la corrupción, derivados de la contratación internacional. De igual forma, los panelistas se detuvieron en aspectos esenciales como las negociaciones ilícitas en Cuba, sus elementos dogmáticos y valoración comparada. Abordaron el control administrativo como forma de enfrentamiento a la corrupción y la eficacia en la tramitación de los expedientes incoados por el delito de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación.

Los participantes expusieron sobre el enfrentamiento, por parte de la Fiscalía, al delito de evasión fiscal, transitando por las modificaciones realizadas en el orden penal y administrativo sobre el tema. Se profundizó en los delitos de trata y tráfico de personas, ahondando en las particularidades de estas figuras delictivas y proponiendo, como una necesidad, la inclusión de las personas mayores de edad, declaradas judicialmente incapacitadas, para regir su persona y administrar sus bienes, como elemento cualificados del delito de tráfico de personas en el Código Penal cubano.

Una seria preocupación por los menores de edad víctimas de delitos y el papel del fiscal en la adecuada protección de estos, desde la exigencia de responsabilidad a sus progenitores, también fue motivo de análisis y reflexión. Se señaló la posibilidad de una mejor formulación del delito de corrupción de menores, a partir de la aproximación a ese ilícito en nues-

tra legislación penal actual, formulándose propuestas en ese orden.

Temas novedosos y de mucha vigencia en el contexto reinante, como las conductas lesivas de la seguridad informática y la intervención de la fiscalía en su enfrentamiento, y la justicia restaurativa en el proceso penal cubano, también fueron abordados. Se profundizó en la peligrosidad social del sujeto, como elemento a considerar para la aplicación del artículo No. 8.3 del Código Penal cubano y en la importancia de que se realice con rigor la investigación de los delitos, en ocasión de conducir vehículos por las vías públicas.

Hubo espacio para una sensible mirada a los derechos humanos de las personas privadas de libertad desde los instrumentos jurídicos internacionales, así como de las garantías de estos en el sistema penitenciario cubano.

Se dedicó tiempo, igualmente, para los temas de dirección y comunicación dentro de la Fiscalía General, reflexionándose acerca de la determinación de competencias de los cuadros y sus reservas; la gestión del tiempo en la planificación y la toma de decisiones.

Psicólogas y comunicadoras de la institución, como parte de un panel, disertaron acerca del impacto de estas ciencias en el perfeccionamiento funcional de la Fiscalía. Se refirieron a la integración de ambos especialistas en el trabajo con el público interno, para propiciar la motivación laboral en el desempeño de las organizaciones; así como a las experiencias obtenidas en el trabajo de ambas profesiones en el sistema de atención a los ciudadanos.

A la constitución cubana, al desafío que representa el derecho agrario para la reforma de esta ley funda-

mental; la posible inclusión en ella del derecho a la protección de los datos personales y la acción constitucional de habeas data, se le dedicaron igualmente espacios.

Mucha polémica generó un panel sobre la protección institucional de los menores de edad en Cuba, ante los nuevos retos sociales, ocasión en la que cuatro fiscales expusieron sus ideas y resultados investigativos acerca de temas cruciales. Entre ellos, la protección de la infancia, a la luz de las nuevas formas de gestión no estatal del cuidado infantil en nuestro país, y las problemáticas que se presentan con los niños ante la migración de sus progenitores, realizándose la propuesta de regular el acogimiento familiar como institución, la cual existe en otras legislaciones foráneas, y tener una mirada más profunda hacia la cuestión del cuidado de niñas y niños fuera de instituciones públicas.

La figura jurídica de la adopción en nuestro ordenamiento legal fue ampliamente abordada, revelándose su importancia y las especificidades de nuestro Código de Familia, y que, a pesar de los avances de esta norma, al cabo de sus treinta años de vigencia, algunas de sus instituciones, como la adopción, ameritan ser actualizadas para una más efectiva protección de los derechos de la infancia.

Problemáticas relativas a la guarda y cuidado de los hijos, así como la comunicación con sus padres tras el divorcio o separación de estos, y el papel del fiscal en la protección de los derechos de los más pequeños también motivaron preocupaciones, abogándose la ponente por una clarificación de las normas jurídicas que disponen la intervención del fiscal en esos complejos asuntos.

Fue duramente criticado el matrimonio de los menores de edad, se enfatizó en que tiene consecuencias negativas para los derechos de la infancia, especialmente a la educación, la salud y a ser protegidos de los malos tratos y la violencia, así como que las niñas son las más vulnerables, remarcándose la idea de que, si bien en Cuba se autoriza solo de forma excepcional; tal aprobación de los padres u otros familiares debería ser suprimida de nuestro Código de Familia, porque no existe razón suficientemente fuerte que la justifique, a más de que consentir en él es un derecho personalísimo, que no debe ejercitarse por medio de otra persona.

Otros temas diversos, actuales y no menos sensibles, suscitaron profundos análisis, tales como los mecanismos tutelares para el adulto mayor en el ordenamiento jurídico cubano y la necesidad de mirar sus insuficiencias, asunto muy ligado al envejecimiento poblacional. También se abordaron los derechos civiles y el enfoque de género en la práctica jurídica cubana, visto desde la perspectiva de las personas homosexuales y transexuales. En todos los casos, se repasó el ordenamiento jurídico vigente y se pusieron de manifiesto las fisuras que padece y la urgencia de actualizarlo, para lograr una mayor protección de los derechos de las personas.

Por una fiscal granmense conocimos de una experiencia de profunda nobleza y sensibilidad, relacionada con la inserción de la fiscalía de ese territorio en el programa para el desarrollo de las zonas montañosas del plan turquino, otra muestra de que nuestro trabajo se engrandece cuando lo desarrollamos en razón de las personas más humildes de nuestro pueblo; labor a la que también tributa el perfeccionamiento del sistema de atención a los ciudadanos en la Fiscalía General, tema que también se explicó con detalles.

Estimados delegados e invitados.

Todas las reflexiones realizadas en este evento, nos han confirmado la permanente vigencia que tienen los temas relacionados con las ciencias penales, el Derecho de Familia y otras ramas del derecho; así como la necesidad de continuar profundizando en el estudio de las instituciones jurídicas y de otros asuntos y fenómenos novedosos que están presentes en nuestra realidad y en la del resto del mundo, única manera de estar preparados para resolver bien los complejos problemas que se nos presentan cotidianamente, en el desempeño de nuestras funciones.

Muchas gracias



Convocatoria para las JORNADAS y EVENTOS CIENTÍFICOS de la Fiscalía General de la República en el 2019

Las jornadas y eventos científicos de la Fiscalía General de la República constituyen un espacio oportuno para el intercambio de criterios y experiencias, en aras de perfeccionar los problemas e insuficiencias que afectan el trabajo del Órgano, proponer soluciones objetivas e incentivar la investigación científica.

Se convoca a las jornadas científicas de la Fiscalía General, fiscalías provinciales y del municipio especial Isla de la Juventud, que tendrán lugar en el mes de mayo de 2019, cuyos trabajos tributarán a los eventos científicos territoriales que se desarrollarán en junio, preparatorios del Cuarto Evento Científico Nacional, a celebrarse en noviembre de 2019, en el que se expondrán las ponencias seleccionadas en los eventos científicos territoriales, además de aquellas que reúnan los requisitos establecidos y el comité organizador considere conveniente incluir por su actualidad e importancia.

Las jornadas y eventos científicos que se convocan están dirigidos a fiscales, profesionales del nivel superior y otros trabajadores no fiscales que laboran en la Fiscalía, jueces, abogados, asesores jurídicos, instructores, policías, penitenciaristas, criminalistas, auditores, psicólogos, comunicadores sociales, periodistas, informáticos, profesores y estudiantes universitarios y otros especialistas interesados en la materia, cuyas temáticas a presentar guarden relación con el trabajo de la Institución.

Principales temáticas

- La legalidad como garantía de la seguridad jurídica.
- La justicia social, el orden jurídico del Estado Democrático y Socialista de Derecho en el ejercicio de la función Fiscal.
- La protección a los derechos ciudadanos. Mecanismos idóneos e indicadores para

medir la calidad.

- El juicio oral y público como garantía del Debido Proceso Legal; incidencia de la imputación Fiscal. Medidas para su perfeccionamiento y sostenibilidad.
- Fortalecimiento del trabajo de la Fiscalía en la exigencia y cumplimiento de los términos legales, en los asuntos que tramita.
- El respeto a los derechos de los privados de libertad. Papel del Fiscal en el cumplimiento de la legalidad desde la mirada del derecho interno y las normas internacionales.
- Los medios de impugnación en el proceso penal, civil, administrativo, laboral y económico. Propuestas para mejorar la efectividad de la intervención Fiscal.
- La persona jurídica como sujeto del Derecho Penal. Retos actuales y futuros.
- Corrupción, delitos económicos y financieros. Buenas prácticas en su prevención y enfrentamiento.
- La efectividad en el enfrentamiento al delito, las indisciplinas sociales e ilegalidades, como garantía para mantener el orden y la seguridad ciudadana.
- Impacto de los instrumentos jurídicos internacionales en el cumplimiento de las funciones fiscales en Cuba. Aciertos y desaciertos.
- Delincuencia organizada, lavado de activos y delitos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación.
- Delitos medioambientales desde la perspectiva de la prevención y su enfrentamiento.
- Migraciones y tráfico de personas. Desafíos, causas y efectos.
- Justicia penal juvenil y medidas alternativas en el sistema jurídico cubano.
- El control administrativo como vía efectiva de la seguridad jurídica.
- Actuación de la Fiscalía en el proceso civil, de familia, laboral y administrativo, de cara a las

actuales transformaciones socioeconómicas y legislativas en Cuba.

- La Fiscalía en la protección de los derechos de los menores de edad.
- Género y Derecho. Prevención de la violencia desde el marco de actuación de la Fiscalía. Su regulación en Cuba y en los instrumentos internacionales.
- La planificación y el control en el sistema de la Fiscalía.
- La información, el análisis y el uso de las tecnologías informáticas y de la comunicación, como herramientas claves para la efectividad de los procesos de dirección que se desarrollan en la Fiscalía.
- Procesos y procedimientos en materia agraria. Retos del Siglo XXI vistos desde la actuación Fiscal.
- La mediación como vía efectiva para la solución de conflictos.
- Los retos del Derecho Mercantil en la actualización del modelo económico cubano. Su incidencia en la actuación Fiscal.
- Problemas actuales del ordenamiento jurídico cubano. Desafíos para el Derecho contemporáneo y aportes de la Fiscalía en su perfeccionamiento.
- La Constitución y su interpretación como necesidad para la actualización de las normas jurídicas. Incidencia del Fiscal y demás operadores del Derecho en la preservación de su supremacía.
- Impacto, condiciones y control de la inversión extranjera en Cuba. Incidencia en el trabajo de la Fiscalía.
- El papel del asesor jurídico en el perfeccionamiento de la actividad Fiscal.
- Impacto de la psicología y la comunicación en el perfeccionamiento institucional, particularmente en la automotivación laboral y el manejo de conflictos.
- La ética y el trabajo político ideológico en el desempeño de la función Fiscal. Valores humanos y lucha contra la corrupción.
- Tratamiento legal de la protección del Adulto Mayor y las personas discapacitadas.
- Acciones de la actividad jurídica en un

escenario de guerra no convencional.

- Alcance y limitaciones del pensamiento estratégico- prospectivo de los jefes en el desarrollo de las diferentes especialidades de trabajo de la Fiscalía.
- Enriquecimiento de la memoria histórica de la Fiscalía.
- Aproximación al manual de buenas prácticas del Fiscal en Cuba.

Indicaciones para la presentación de trabajos:

Los trabajos de las jornadas científicas serán presentados a la Comisión Técnica de la Fiscalía General y de las fiscalías provinciales, según corresponda, antes del día 30 de abril de 2019, los que irán clasificando para los restantes eventos de la Fiscalía que se convocan durante el año (Evento Científico Territorial y Cuarto Evento Científico Nacional).

Los trabajos se presentarán en formato papel y versión electrónica, con una extensión de hasta 25 cuartillas, con procesador de texto Microsoft Word. Se utilizará interlineado sencillo, los párrafos deben estar separados entre sí por un espacio, utilizando como fuente Arial 12 para el texto y Times New Roman 10 para las notas a pie de página, texto justificado, a un espacio, en hoja carta, con márgenes de 2,5 cm. En la presentación se consignará el título, autor(es), institución y se acompañará un resumen de una cuartilla.

El programa científico de cada jornada y evento se desarrollará en comisiones de trabajo, en correspondencia con los temas a tratar, mediante ponencias, talleres, paneles y mesas redondas, con 15 minutos de exposición y 20 minutos de debate. Para mayor información pueden comunicarse con los organizadores.

MSc. Hortensia Rodríguez Bonachea

Fiscal Jefe Dirección de Formación y Desarrollo
Teléfonos: 7212 5614; 7206 9090, ext. 160
Email: hortensia@fgr.gob.cu

MSc. Asseneth Verdecia Rodríguez

Fiscal Jefe de Departamento de Formación Académica de Posgrado e Investigaciones.
Teléfonos: 7212 5614; 7206 9090, ext. 160
Email: asseneth@fgr.gob.cu

Los trabajos premiados en el Tercer Evento Científico Nacional fueron:

“El control de la fase preparatoria. Necesidad impostergable de modificación”. MSc. Rafael Soler López. Fiscal Jefe Dirección de Atención al Ciudadano. Fiscalía General de la República.

“La preparación del Fiscal para un adecuado control de los procesos penales asociados a la corrupción, derivados de la contratación internacional”. MSc. Bileardo Amaro Guerra. Fiscal Jefe. Departamento de Procesos Penales, Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades. Fiscalía General de la República.

“Evasión Fiscal. Enfrentamiento por la Fiscalía”. MSc. Rudy Nelson Díaz Torres. Fiscal. Dirección de Procesos Penales. Fiscalía General de la República.

“El Derecho de Familia y la figura de la adopción en Cuba, apuntes para un estudio”. MSc. Diana Rosa Simón Gutiérrez. Fiscal. Dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales. Fiscalía General de la República.

“Mecanismos tutelares para el adulto mayor en el ordenamiento jurídico cubano. Una mirada necesaria a sus insuficiencias y realidades”. MSc. Asseneth Verdecia Rodríguez. Fiscal Jefe. Departamento de Formación Académica de Posgrado e Investigaciones, Dirección de Formación y Desarrollo. Fiscalía General de la República.

“Perfeccionamiento del Sistema de Atención a los Ciudadanos de la Fiscalía General de la República. Retos ante el contexto cubano actual”. MSc. Mario César Hernández González. Fiscal Jefe. Departamento de Atención al Ciudadano, Dirección de Atención al Ciudadano. Fiscalía General de la República.

“Los delitos de trata y tráfico de personas asociadas a la migración. Fundamentos para su adecuada regulación jurídica en el Código Penal cubano”. Dra. C. Lissett Páez Cuba. Profesora y Lic. Laidiana Torres Rodríguez. Profesora. Universidad Hermanos Saíz. Pinar del Río.

“Integración de psicólogos y comunicadores en el trabajo con el público interno, para propiciar la motivación laboral en el desempeño de las organizaciones”. Lic. Vanessa Rodríguez Lara. Psicóloga y Lic. Luz del Alba Lemus Hernández. Comunicadora. Fiscalía Provincial de Pinar del Río.

“El envejecimiento poblacional en Cuba. Contribución de la Fiscalía respecto al tema”. Lic. Yudelkys Arestuche Torres. Fiscal. Fiscalía Provincial de Matanzas.

“La protección de la infancia a la luz de las nuevas formas de gestión no estatal del cuidado infantil en Cuba. Función tuitiva del Fiscal”. MSc. Milagros Rodríguez Estrada. Fiscal. Fiscalía Provincial de Villa Clara, Yusel Rodríguez Reyes. Fiscal Jefe. Departamento. Fiscalía Provincial de Villa Clara y Sara Vargas Abreu, Fiscal. Secretaria del Fiscal General de la República.

“Procedimiento para determinar competencias de cuadros y reservas en la Fiscalía Provincial de Villa Clara”. MSc. Celenys Castro Rodríguez. Fiscal Jefe. Departamento de Cuadros. Fiscalía Provincial de Villa Clara.

“Oratoria e informe forense del fiscal en el juicio oral. Estructura, organización y función educativa”. My. Antonio Rafael Sosa Viamonte, Fiscal Militar. Camagüey, MSc. Marisol Brito Villalta. Fiscal Jefe. Departamento de Formación y Desarrollo. Fiscalía Provincial de Camagüey y Lic. Lesly Guerra Suárez. Profesora. Camagüey.

“Las negociaciones ilícitas en Cuba. Elementos dogmáticos y valoración comparada”. MSc. Manuel Alberto Leyva Estupiñán. Profesor y Msc. Larisbel Lugo Arteaga. Profesor. Universidad Oscar Lucero Moya. Holguín.

“Intervención de la Fiscalía como garantía de la validez de los actos de investigación en el proceso penal”. MSc. Yenisey González Rodríguez. Fiscal Jefe. Departamento de Formación y Desarrollo. Fiscalía Provincial de Granma.

“La guarda, cuidado y comunicación con los hijos menores de edad tras el divorcio o separación de los padres en Cuba. Papel del fiscal en la salvaguarda de los derechos de los infantes”. Esp. Ládins Ricardo Soria. Fiscal Jefe. Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales y Lic. Arianna Ondina Toledo Esteva. Fiscal Municipal. Fiscalía Provincial Santiago de Cuba.

“Bases Generales del Derecho Agrario. Un desafío para la reforma a la Constitución cubana”. MSc. Yudisbel Guevara Flores. Fiscal Jefe Municipal Contramaestre. Fiscalía Provincial Santiago de Cuba.

En esta Edición Especial de la revista se presenta un resumen de algunos de los trabajos presentados.

RESUMEN DE LAS PONENCIAS

TRIBUNAL NO 1. MATERIA PENAL Y ENFRENTAMIENTO A LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA

EVASIÓN FISCAL. ENFRENTAMIENTO POR LA FISCALÍA

La Hacienda Pública es el bien jurídico tutelado, no entendido como algo estático, sino dinámico, valorado como sistema de recaudación de ingresos y realización de gastos. Bien jurídico difundido, del que somos titulares todos los miembros de la sociedad.

La lesión patrimonial que producen los delitos fiscales, impide la realización del principio de justicia material en el campo tributario, toda vez que se afecta la correcta asignación de los recursos públicos.

La Evasión fiscal desapareció de la legislación cubana con la Ley No.21 de 1979 y se reincorpora tras las modificaciones que por el Decreto-Ley No.150 del año 1994 se realizaron al Código Penal.

Cumplimentado en el Título XIV "Delitos contra la Hacienda Pública" adquiere trascendencia jurídica entre los cubanos, a partir del 10 de junio del mismo año, hecho que confirma lo novísimo de esta figura dentro de nuestro ordenamiento coactivo penal.

Legislación vigente del Sistema Tributario.

A. Ley No. 113 de 2012, Ley del Sistema Tributario.

B. Decreto No. 308 de 2012, Reglamento de las normas generales y de los procedimientos tributarios.

MSc. RUDY NELSON DÍAZ TORRES

FISCAL
DIRECCIÓN DE PROCESOS PENALES
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



C. Resolución No. 353 de 2013, dictada por el Ministerio de Finanzas y Precios. Sobre reglamentación de la Ley No.113 de 2012. (Gaceta Oficial No. 27 Extraordinaria del 26 de septiembre de 2013).

Conclusiones

PRIMERA: En el contexto económico actual, en el que se incrementa la inversión extranjera y se diversifican las formas de gestión no estatal, han proliferado manifestaciones de evasión del pago de los tributos por la actividad que desarrollan ambos sectores, por lo que se prevé en este escenario, un aumento de la radicación de los delitos de Evasión Fiscal.

SEGUNDA: Este delito, por sus características y por los presupuestos que se recogen en el Código Penal, requiere de una investigación particular, para lo que es necesario uniformar en los órganos de la Fiscalía, lo relativo a la presentación de la denuncia por estos hechos, la forma de

actuación de los fiscales, el control de la fase preparatoria, la presentación de las conclusiones provisionales al Tribunal y la preparación y desempeño en el acto del juicio oral.

TERCERA: Las razones antes expuestas, determinan la necesidad de regular mediante normas internas, por la Fiscalía General de la República, el modo de actuación de los operadores designados para el enfrentamiento a estas conductas delictivas, de extrema complejidad técnico- jurídico- penal, con trascendencia a la economía nacional, lo que requiere especial preparación profesional de los fiscales a cargo de esta tarea, a lo que modestamente aspira el autor contribuya esta breve incursión en el tema de referencia.

LA PREPARACIÓN DEL FISCAL PARA UN ADECUADO CONTROL DE LOS PROCESOS PENALES ASOCIADOS A LA CORRUPCIÓN, DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN INTERNACIONAL.

La decisión política de enfrentar radicalmente los hechos contra la economía o asociados al fenómeno de la corrupción, partiendo de la convicción planteada por Fidel y Raúl de que este tipo de conductas son las que pueden destruir a la Revolución, ha incentivado la necesidad de enfrentar con más fuerza el fenómeno, no solo a lo interno, sino también en figuras o conductas delictivas que van más allá de los límites de nuestras fronteras.

El individuo, en su deseo de satisfacer sus necesidades, se ve compulsado a adoptar una conducta práctica que aún no tiene respaldo legal ni reconocimiento oficial, compra y vende, participa en el mercado negro y busca fuentes alternati-

MSc. BILEARDO AMARO GUERRA

FISCAL JEFE

DEPARTAMENTO DE PROCESOS PENALES

DIRECCIÓN DE ENFRENTAMIENTO

A LA CORRUPCIÓN E ILEGALIDADES

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



vas de ingresos que, en muchos casos, pueden estar determinados en el ejercicio de sus funciones institucionales. Esta contradicción, entre la realidad social y lo que está instituido, se reproduce en la conciencia social, provocando un desdoblamiento de este elemento de la conducta, a lo que llamamos la doble moral.

Dejemos establecido, que para los fines de este trabajo, cuando nos referimos a la corrupción, estamos hablando de la administrativa, de cualquier tipo de abuso que ejecute algún funcionario público, de la autoridad que le ha sido conferida por el Estado, para poder servir al pueblo, lo cual hace con el fin de conseguir alguna clase de lucro o beneficio, para sí o para otra persona (Bodes. S/A).

La corrupción, como resultado de la conducta consciente de los hombres, adquiere dimensión universal, en la medida que se tolere. El fenómeno, en sentido general, ha sido categorizado por Naciones Unidas como: “la contracara del desarrollo”, por las consecuencias perniciosas que trae para el desarrollo del mundo y la práctica de las buenas costumbres, pues en primer lugar, causa enormes costos económicos, finalmente soportados por el ciudadano; genera inestabilidad política y desconfianza en el sistema; pervierte el desarrollo económico e impide, o dificulta, el progreso de las naciones; lleva a la arbitrariedad y al desprecio de la primacía del Derecho; aumenta el poder de la criminalidad organizada; propicia la desintegración social; destruye los fundamentos morales de la sociedad; atenta contra los derechos humanos y la dignidad de la persona; mina los cimientos del Estado, al romper el vínculo de fidelidad de gobernantes y gobernados; y es capaz de socavar los fundamentos de la democracia.

Su enfrentamiento depende de las condiciones sociopolíticas y económicas de cada país, las que aportan los gérmenes para su desarrollo, por lo que las formas de aparición son distintas en cada lugar y comprende una amplia variedad de temas, preocupaciones y problemas, apenas vinculadas por un nombre común, del que su análisis resulta un conjunto muy complejo de perspectiva.

A partir de los años noventa, y acentuándose desde los dos mil, la tendencia en estos hechos

en nuestro país ha tenido un incremento cuantitativo permanente, pero sobre todo con una mayor cualificación de su organización, comisión, colectivización e incluso internacionalización.

En ello, han incidido circunstancias relacionadas con las decisiones estatales, obligadas por las necesidades y el desarrollo del país, apertura al turismo, el comercio exterior y la inversión extranjera; igualmente, en los últimos años otras condiciones existentes, como despenalizaciones o decisiones estatales sobre comportamientos de la población (libre decisión sobre la propiedad personal fundamental como casas y carros, viajar al exterior, actividades laborales no estatales, pago de impuestos por diversas actividades individuales); combinadas con la institucionalización del país y la implementación de organizaciones y mecanismos de control, con impacto en las personas naturales y jurídicas, que si bien no llegan ni remotamente a cubrir todos los requerimientos, sí han ido elevando los niveles de detección de hechos y procesos nocivos que exteriorizan el fenómeno de la corrupción.

Actualmente, existen un grupo de situaciones que inciden negativamente en la efectividad del procesamiento de estos hechos, siendo el papel del fiscal determinante en los resultados eficaces que pretendemos, considerando la falta de preparación técnica uno de los principales problemas que inciden, lo que se hace más evidente y necesario a partir de definirse la conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y los lineamientos aprobados en el 7mo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Dentro de estas se encuentra la “Política Económica Externa”, que define 15 lineamientos relacionados con el tema que abordamos en el presente trabajo, entre los que se encuentran los siguientes:

- Continuar fortaleciendo el papel del

contrato como instrumento esencial de la gestión económica, elevando la exigencia en su cumplimiento en las relaciones entre los actores económicos.

- Aplicar el principio de “quien decide no negocia” en toda la actividad que desarrolle el país en el plano de las relaciones económicas internacionales.

- Consolidar la credibilidad del país en sus relaciones económicas internacionales, mediante el estricto cumplimiento de los compromisos contraídos.

Es evidente, que en las condiciones actuales es necesario elevar el nivel de enfrentamiento al delito transnacional, incluyendo, entre otros, el derivado de una acción contractual, facilitándose también, como medida emergente, la cooperación con otros países, no obstante, en lo interno existen todavía indefiniciones y barreras que contribuyen a que no siempre se realice una correcta tipificación del ilícito y en las políticas penales para su imputación, dependiendo, en la mayoría, de criterios personales, que no siempre por desconocimientos, permiten lograr la efectividad requerida en toda su extensión.

Es por ello, que centrarnos en los ilícitos derivados de la contratación internacional, resulta de vital importancia para el combate que hoy libramos, en sentido general, contra este flagelo. Si con ello aportamos una herramienta que ayude a tal propósito, entonces sentiremos el placer de, además de hacerlo con la toga puesta, haber contribuido a la preparación de nuestro ejército de fiscales e instructores, lo que nos hace todavía mejores defensores de nuestra convicción revolucionaria.

Fueron variados los métodos utilizados en la investigación, entre ellos las entrevistas y criterios de expertos, jueces, auditores, especialistas del Comercio Exterior, instructores, fiscales y abogados; además de sostener el conocimiento empírico de los especialistas que directamente enfrentan el tema en la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades de la Fiscalía General de la República. Esta fue creada

en mayo de 2013, mediante la Resolución No.24 del Fiscal General de la República, días después del discurso pronunciado por el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su Octava Legislatura donde expresó ...“nos proponemos mantener el enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades de todo tipo, incluyendo el combate a las manifestaciones de corrupción que atentan contra las bases mismas de nuestro sistema social, partiendo de que sin la conformación de un ambiente de orden, disciplina y exigencia en la sociedad, cualquier resultado será efímero”...

El trabajo se compone, además, de tres capítulos, que están desarrollados en función de dar respuesta a los tres objetivos específicos que nos propusimos. Todo su contenido es de vital importancia para resolver el problema científico planteado acerca de la eficacia en el enfrentamiento a estos delitos. Escogimos como tema central la preparación que tiene que alcanzar el fiscal para ese objetivo, pues conocemos de la inexistencia de una metodología que ayude en este sentido, el contenido de todo el trabajo contribuye a esa formación.

El capítulo primero está dedicado a todo lo general existente alrededor del tema de la corrupción y la contratación, aspectos básicos que han de dominarse para enfrentar el fenómeno. El segundo capítulo desarrolla todas las barreras, debilidades y ventajas que presentamos en la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades, que coexisten en nuestro entorno y que de forma directa e indirecta influyen en que no tengamos un mejor resultado, desarrollando desde el punto de vista técnico una de las barreras que presentamos, referente a la calificación de los ilícitos.

El tercer capítulo es la propuesta concreta que realizamos para lograr una eficiente y ágil preparación del fiscal sobre el tema y, paralelamente a esta, comenzar ya a implementar los aspectos básicos esenciales, que como resultado de este estudio, debe tener en cuenta el fiscal para realizar un eficiente y efectivo control del proceso penal en todas las fases del mismo, con un proceso de retroalimentación medible que nos permita ir elevando la calidad. Finalmente, realizamos nuestras conclusiones de la investigación y recomendaciones al Fiscal General de la República, en función de eliminar las otras barreras que limitan un mejor resultado.

Conclusiones

1. La política económica exterior del país, marca una tendencia creciente necesaria para el desarrollo económico sostenido del mismo, así como para elevar el bienestar de vida de la población, las que se materializan esencialmente a

través de las operaciones comerciales entre los países, las que se soportan jurídicamente a través del contrato internacional.

2. El incumplimiento de las disposiciones legales durante el proceso de negociación, contratación y ejecución de lo pactado, condiciona afectaciones económicas y de otra índole, que pueden constituir ilícitos penales, con mayor gravedad cuando se asocian a violaciones de principios éticos y morales propios de conductas de corrupción.

3. Las complejidades de estos hechos, la insuficiente preparación y experiencia de los fiscales que asumimos la responsabilidad técnica y política de enfrentarlos, han sido algunas de las causas que dificultan la calificación de los ilícitos penales, que encierran conductas enmarcadas en las afectaciones económicas ocasionadas a entidades nacionales y al país, así como en la calidad del control y demora en la tramitación de las investigaciones de procesos penales realizados, para lograr su esclarecimiento y consecuente respuesta penal en estos delitos.

4. La cooperación internacional, la dispersión normativa y el uso de la tecnología constituyen los principales retos a vencer para elevar la efectividad en el enfrentamiento al flagelo de la corrupción transnacional.

Recomendaciones

Proponer al Fiscal General de la República lo siguiente:

1. Continuar aprovechando los espacios internacionales en los que participe algún representante de nuestra institución, para insistir sobre la necesidad de concientizar a los gobiernos sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional como una vía eficaz para enfrentar el flagelo de la corrupción transnacional.

2. Organizar un sistema de enfrentamiento al fenómeno creciente de la corrupción en el resto de las provincias del país, sin necesidad de crear nuevas estructuras, previa preparación de los fiscales seleccionados en la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Illegalidades.

3. Presentar en eventos científicos de la Fiscalía General de la República el presente trabajo, a los efectos de divulgar el estudio del tema y para la preparación de los fiscales

Bibliografía (selección)

Bodes Torres, Jorge. S/A. *El enfrentamiento a la corrupción por los tribunales*.

Castro Ruz, Raúl. 28 de diciembre de 2008. *Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en el Segundo Período de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular*. Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.

Castro Ruz, Raúl. 24 de febrero de 2013. *Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura de la Sesión Constitutiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su VIII Legislatura, y del Consejo de Estado*. Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.

Circular No. 6 de 2011 del Fiscal General de la República. "Establece indicaciones para la aprobación del inicio del proceso confiscatorio previsto en el Decreto- Ley No. 149 de 1994."

Código de Ética de los Cuadros y Trabajadores de la Fiscalía General de la República. 2012.

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. Resolución No. 55/25 de la Asamblea General, del 15 de noviembre de 2000.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Resolución No. 58/4 de la Asamblea General, del 31 de octubre de 2003.

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y Sustancias sicotrópicas. 1988.

Delgado Cura, Darío. 2014. *El perfeccionamiento del enfrentamiento a la corrupción por la Fiscalía General de la República*.

Díaz Kessell, Ileana. 2015. *El fiscal en el enfrentamiento a la corrupción y las ilegalidades durante la ejecución de las Investigaciones*.

Fuentes Guzmán, Dixán. 2014. *Bases para el perfeccionamiento de la tutela penal al sector de la economía en Cuba*.

Herrera Gandol, Dimas. 2015. *Apuntes sobre la utilización de testaferros en Cuba, en el contexto de la inversión extranjera, el Comercio Exterior y el trabajo por cuenta propia*.

Leyva Estupiñán, Manuel Alberto y Larisbel Lugo Arteaga. 2015. *De la corrupción administrativa a la delincuencia económica: consecuencias de la actualización del modelo económico cubano en el Derecho Penal*.

Bejerano Portela, Gladys. 2009. *Conferencia sobre la corrupción*. Colegio de Defensa Nacional.

INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA COMO GARANTÍA DE LA VALIDEZ DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL

En el informe técnico se refleja el Discutir sobre la actuación de la Fiscalía en Cuba en los momentos actuales es un propósito abarcador, si tenemos en cuenta que, como consecuencia del perfeccionamiento de la estructura, las misiones, tareas y funciones se extienden, no sólo en número, sino también en complejidad y exigencias técnicas.

La participación del fiscal en el proceso penal en su condición de sujeto y parte de una relación jurídica por naturaleza contradictoria, en la que por un lado enfrenta la representación del Estado, por quien le ha sido atribuida la titularidad para el ejercicio de la acción penal, y por otro el estricto cumplimiento de la ley, que indudablemente se extiende a la actuación de su contraparte, exigen de una adecuada ponderación en el cumplimiento de ambas tareas.

Intervenir de manera efectiva en el logro de lo que ha sido definido como “Paradigma” del proceso es otra de las importantes misiones en las que debe intervenir el fiscal, me refiero al cumplimiento de los postulados, principios, derechos y garantías que informan el Debido Proceso.

Resulta claro el carácter ecléctico del sistema de enjuiciar cubano; no obstante, se insiste, como parte de su perfeccionamiento, en la necesidad de hacer prevalecer aún más las características del sistema acusatorio, lo que innegablemente incrementaría el papel del fiscal en la relación jurídico procesal, ya que todo lo que mueve el engranaje procesal está contenido en los términos en que por este

MSc. YENISEY GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

FISCAL JEFE

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

FISCALÍA PROVINCIAL DE GRANMA



es ejercida la acción, que constituye su obligación ineludible y que tiene las particularidades de ser pública, única, indivisible, irrevocable, necesaria, inevitable, obligatoria e inmutable.

Derivado de esa alta responsabilidad, pues corresponde al fiscal en nombre y representación del Estado establecer los términos de la pretensión, está obligado a ejercer un control más profundo sobre las actuaciones que realiza la Policía y el Instructor, de manera tal que pueda ser más efectivo su papel de control de la Legalidad.

El material o contenido probatorio se introduce en el proceso de modos diferentes, a los que se les denomina medios de prueba. Su clasificación y estudio se ha convertido en uno de los aspectos más importantes del Derecho Probatorio, por la necesidad de que las sentencias versen sobre la verdad de los hechos de la acusación y que las partes intervinientes en

el proceso puedan presentar las pruebas pertinentes para fundamentar sus pretensiones. El sentido de la sentencia, y la aceptación que sobre la misma tengan sus destinatarios, depende de la demostración de que concurren en la realidad concreta los supuestos de hecho de las normas aplicables. Esta demostración se produce mediante la prueba y da paso a la aplicación de las consecuencias jurídicas que establecen las normas sustantivas.

No obstante, el derecho a la prueba, dentro de los términos del Estado de Derecho, no puede ser catalogado como un derecho ilimitado, ni siquiera en un terreno en el que la búsqueda de la verdad material adquiere el interés público que tiene en el proceso penal. Aun reconociendo la presencia de ese interés, el ordenamiento reconoce limitaciones al ejercicio de la actividad probatoria en el proceso penal, pues, como se ha dicho, “la verdad no puede indagarse a cualquier precio”.

En la distinción entre actos de investigación y actos de prueba, existen autores que niegan el carácter de acto de prueba a las diligencias de la fase preparatoria del juicio oral, mientras otros, le reconocen naturaleza de actos de prueba, con excepción de aquellas acciones que están destinadas a la recogida y aseguramiento del material probatorio, como por ejemplo, la detención del presunto culpable, la identificación del cadáver, la autopsia, entre otros.

Consideramos que la fase de instrucción va encaminada a la búsqueda y descubrimiento de las fuentes de prueba, así como su aseguramiento, para permitir que las partes puedan aportarlas al proceso, a través de los oportunos medios de prueba, por lo tanto, no existen en esta fase actos de prueba, sino medios de obtención de fuentes de prueba. Es por ello que, la producción, utilizabilidad y eficacia del material probatorio en la cognición del proceso penal debe cumplir un grupo de exigencias, presupuestos y limitaciones de fuerza vinculante y función protectora y garantista, cuyo eje central lo constituyen los derechos fundamenta-

les internacionalmente reconocidos.

Del tema relacionado con las prohibiciones probatorias surgen diversos problemas, como la admisibilidad de la investigación y comprobación de determinadas relaciones fácticas y cualidades personales, en cuanto al tema u objeto de prueba, la regulación y formalización de la adquisición de las fuentes de prueba, la introducción en el proceso del material probatorio a través de los medios de prueba legalmente autorizados, la trascendencia de las exigencias formales en la producción y valoración de la prueba (momento, oportunidad, condiciones), la controlabilidad y la utilizabilidad del material probatorio (sobre los sujetos y efectos de la prueba).

En el campo del derecho penal, el tema de la Prueba ilícita (supuesto normativo hipotético para la aplicación de la regla de exclusión) genera complejas y profundas discusiones, debido a los valores que se conjugan, al decir que un proceso es nulo por razón de que las pruebas sean prohibidas o se practicaron con violación de normas fundamentales, o por el desconocimiento de procedimientos legalmente determinados, declarándolas inútiles en todo momento para el proceso de formación de convicción.

El tema se plantea especialmente en atención a los nuevos métodos que la ciencia y la tecnología han hecho usuales en la vida cotidiana y que, en consecuencia, parecen estar llamados a formar parte del proceso penal, entre los que encontramos las intervenciones de las comunicaciones electrónicas, el scanner para detectar conversaciones a través de móviles, el reconocimiento antropométrico por la voz o las exploraciones corporales como el ADN o la extracción coactiva de sangre, los que no pueden permanecer olvidados por la Ley ni por los órganos jurisdiccionales, que han de buscar las vías y las garantías necesarias para su inclusión en el proceso, sin menoscabo de los derechos de los acusados y de los principios que sustentan el proceso penal y que la convicción judicial se obtenga en atención a medios de prueba concretos, específicos y lícitos.

Uno de los tópicos más complejos que se plantean, es el relativo al de la admisibilidad de la utilización del cuerpo del propio imputado, mediante actos de intervención en él, a los efectos de investigación y comprobación de los delitos, decretada o adoptada de forma coactiva; así como se vienen adoptando por algunos procesalistas posturas radicales, al considerar a las pruebas documentales y periciales, como modalidades de prueba preconstituida, otorgándoseles valor probatorio desde que surgen, sin tener en cuenta la falta de congruencia entre lo que resulta científicamente como verdad de ciencia y la verdad material que se busca en el proceso, por lo que se convierten en mecanismos que coaccionan el papel del juez y adquieren dimensiones de prueba tasada, aún y cuando es real y aceptada la incongruencia verdad material-verdad de ciencia.

Por ello, resulta imprescindible determinar en qué consiste la ilicitud probatoria, sus causas y efectos, tanto propios como derivados y en qué situación se encuentra nuestro ordenamiento procesal para que los intervinientes en el proceso puedan cumplir con las exigencias de un proceso penal garantista y que el juzgador logre la convicción judicial dentro de las formas de expresión de los principios de legalidad y de la libre valoración de la prueba, los que entre otros, nos permiten expresar un transparente sentido de la justicia en la solución de un conflicto social.

Ateniendo a estos argumentos, me referiré a un aspecto que estimo de gran importancia en la actuación del fiscal en el Proceso Penal: cómo garantizar la validez de los actos de investigación en el proceso penal.

Conclusiones

La actividad probatoria constituye el núcleo del proceso penal y se desarrolla orientada o dirigida por determinados principios básicos, que exigen una actuación dentro de las formas de expresión de los principios de legalidad y de la libre valoración de la prueba, los que permiten expresar un transparente sentido de la justicia en la solución de un conflicto social.

La licitud de los medios de prueba implica que estos se obtengan con el cumplimiento de las normas constitucionales y las normas procesales que constituyen garantías del Debido Proceso, que las fuentes de pruebas se formalicen e introduzcan en el proceso, a través de los medios legalmente autorizados y se valoren por el juzgador, de acuerdo con las reglas que sustentan el sistema de libre valoración de la prueba.

La ilicitud de los medios de prueba designa los supuestos en que la prueba es inadmisibles, declarándola inútil en todo momento para el proceso de formación de la convicción o que practicadas no han de

ofrecer razones de suficiencia a la conciencia del juzgador. Las ilicitudes probatorias atentan contra la confianza que deben tener los ciudadanos en la intervención de los sujetos procesales en la actividad probatoria, conlleva a errores judiciales e imposibilitan la emisión de sentencias con una sólida base fáctica probada, no permite desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, limita el principio de libre valoración de la prueba, así como a la juridicidad y legitimidad de la administración de justicia.

Los sujetos procesales tienen la necesidad de dominar las razones que determinan la licitud e ilicitud de los medios de prueba, que les permitan actuar amparados por el principio de legalidad y con ello se logre la transparencia del proceso y se puedan alcanzar cada uno de los fines que le dieron vida.

Nuestra legislación adolece de fórmulas generales sobre la prohibición de aprovechamiento de la prueba ilícita en el razonamiento fáctico de la sentencia. Es necesaria la existencia de una causal del recurso de casación por quebrantamiento de forma, que autorice a las partes a impugnar la resolución definitiva cuando estimen vulnerados los requerimientos procesales.

El análisis realizado acerca de las particularidades con que se presentan los actos de investigación y los medios de prueba establecidos en el proceso penal cubano, en lo concerniente a las licitudes probatorias y aquellos supuestos, unos novedosos, otros no tanto, que pueden generar ilicitudes probatorias en su empleo, constituye una contribución más a dimensionar la trascendencia que en el orden procesal posee la actividad probatoria, en la que las razones de seguridad jurídica han de imponerse por encima, incluso, de las carencias normativas que podamos tener. Ese es el reto para la Fiscalía: hacer de la actividad probatoria en el proceso penal una herramienta de garantía en la construcción y defensa de nuestro Estado de Derecho.

Bibliografía (selección)

Abab Fernández, Enrique. 1984. *Valor probatorio del sumario y reforma procesal penal. Jornadas de Derecho Procesal*. Madrid, España: Consejo General del Poder Judicial.

Arranz Castellero, Vicente Julio. *Las acciones de instrucción*. Revista Cubana de Derecho No. 8 de 1992. La Habana, Cuba: Unión Nacional de Juristas de Cuba.

_____. 2002. *La Prueba en el Proceso Penal. Temas para el estudio del proceso penal*. Tomo II. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela.

Asencio Mellado, José María. 1989. *Prueba Prohibida y Prueba Preconstituida*. Madrid, España: Editorial Trivium.

Batista Ojeda, María Elvira. S/A. *Las pruebas directas e indirectas. Su valor probatorio en el proceso penal*. Material Docente.

Bodes Torres, Jorge. *La prueba Documental*. Revista Cubana de Derecho No.8 de 1992. La Habana, Cuba: Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Calvo Cabello, José Luis. 1996. *La Valoración de la Prueba en el Juicio Oral. Editado en Cuadernos de Derecho Judicial, La Prueba en el Proceso Penal II*. Madrid, España: Consejo General del Poder Judicial.

Carnelutti, Francesco. 1955. *La Prueba Civil*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Arayú.

_____. 1950. *Lecciones sobre el procesal penal*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas Europa-América.

Carrascosa López, Valentín. 1992. *Las Pruebas y el Proceso*. Revista Informática y Derecho no. 2. Editada por la Universidad

Nacional de Educación a distancia, Mérida. Consultado en: www.publicaciones.derecho.org

Couture, Eduardo. 1993. *Fundamento de Derecho Procesal Civil*. Argentina: Editorial De Palma.

Florián, Eugenio. 1934. *Elementos de Derecho Procesal Penal*. Barcelona, España: Editorial Bosch.

García Naranjo, Elsa Cristina. septiembre de 2006. *La prueba pericial: concepciones sobre una prueba dual*. Tesis en opción al Título de Especialidad. Facultad de Derecho, Universidad de Oriente.

Gimeno Sendra, Vicente y otros. 2001. *Lecciones de Derecho Procesal Penal*. Primera Edición. COLEX.

Guerrero, Walter. 1989. *La Prueba Penal*. Tomo III. Segunda Edición Actualizada.

Ley No. 62. Código Penal actualizado.

Ley No. 5/1977. Ley de Procedimiento Penal Actualizada.

Ley No. 7/1977. Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral.

TRIBUNAL NO 2. MATERIA CIVIL, FAMILIA Y MENORES

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. RETOS ANTE EL CONTEXTO CUBANO ACTUAL

En el proceso de actualización del modelo económico cubano, como forma de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, el desarrollo económico y la elevación del nivel de vida de la población, se aprobaron e implementaron los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

En la política económica está presente el concepto de que el socialismo significa igualdad de derechos y de oportunidades para todos los ciudadanos, como forma de refrendar los postulados constitucionales, estableciendo en el lineamiento

MSC. MARIO CÉSAR HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

FISCAL JEFE

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



No. 140 la necesidad de continuar preservando las conquistas de la Revolución, tales como el acceso a la atención médica, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la tranquilidad ciudadana, la seguridad social y la protección mediante la asistencia social a las personas que lo necesiten; al mismo tiempo en el No. 142 se expresa la necesidad de garantizar la elevación sistemática y sostenida de la calidad de los servicios que se brindan a la población.

En su implementación, se han emitido por los órganos facultados para ello, normativas jurídicas que permiten, de manera más efectiva, garantizar y ampliar el ejercicio de las garantías y libertades fundamentales, así como los derechos civiles y políticos de los ciudadanos cubanos y extranjeros, los que por sí pueden hacerlos valer y exigirlos por las vías legalmente establecidas, ya sea extrajudicialmente, dirigiendo quejas y peticiones a las autoridades administrativas, representantes populares, organizaciones sociales, políticas, y de masas; ante las administraciones locales, los órganos representativos, la Fiscalía en todas sus instancias; y los órganos judiciales, ante daños y perjuicios causados por funcionarios o agentes del Estado.

La Constitución de la República de Cuba establece en su artículo No. 127 que la Fiscalía General de la República, es el Órgano del Estado al que corresponde, como objetivo fundamental, el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales, y por los ciudadanos.

En su artículo No. 63 consagra, además, el derecho de todo ciudadano a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en el plazo establecido, derecho que desarrolla la Ley No. 83 de

1997 de la Fiscalía General de la República en su artículo No. 24, que dispone que a través del fiscal designado se atenderán, investigarán y responderán las denuncias, quejas y reclamaciones que en el orden legal formulen los ciudadanos.

La Fiscalía General de la República cuenta con un procedimiento para la atención a los ciudadanos y ciudadanas. Está integrado por dos procesos fundamentales de trabajo: la atención a través de la comparecencia personal, la línea única, el correo postal o la entrega de escritos, el correo electrónico, el portal web y otras formas que deban incorporarse; así como la tramitación de las quejas, peticiones, denuncias y reclamaciones definidos en la Resolución No. 2 de 2015 del Fiscal General de la República.

Considerando que la Fiscalía General de la República debe velar por el cumplimiento de los objetivos de la administración pública, y en relación con el tema, los referidos a: satisfacer con calidad las necesidades siempre crecientes de la población; y que para ello tiene que accionar para garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos y la seguridad ciudadana, el servicio de atención a los ciudadanos deberá estar dirigido a verificar a profundidad los planteamientos de la población y coadyuvar a la solución de las problemáticas que enfrentan, en defensa de los intereses del Estado y la sociedad, para lo cual el sistema diseñado requiere de ser perfeccionado constantemente, en función de adaptarlo a las nuevas condiciones imperantes.

Teniendo en cuenta los elementos antes expuestos hemos formulado el siguiente Problema científico: ¿Cómo perfeccionar el sistema de atención a las ciudadanas y ciudadanos en la Fiscalía General de la República para lograr niveles superiores de calidad en esta actividad?

La necesidad de la investigación radica en que ante la situación problemática planteada, en la que se presentan resultados que inciden directamente en la calidad de la actuación de la institución, se requiere instrumentar un sistema que disponga los modos de actuación, a partir de la implementación de nuevas vías de comunicación con los ciudadanos, el intercambio con otras oficinas especializadas que conforman el sistema del país para esta actividad, la tramitación de los asuntos vinculados con la protección de los derechos de adultos mayores, menores, y otros sectores vulnerables de la población y de los residentes en zonas de difícil acceso; así como los que tienen como causa la discriminación de género o raza, violencia contra la mujer o intrafamiliar, el actuar de los fiscales y otras manifestaciones afines.

El objeto de investigación es la normativa interna del Fiscal General que establece procedimiento para garantizar el sistema de atención a los ciudadanos, y el campo de

acción, la Fiscalía General de la República con sus unidades organizativas en los distintos territorios.

A fin de buscarle la solución más adecuada al problema de la investigación, y valorando que se requiere perfeccionar la actuación de nuestro órgano, se traza como Objetivo General: Establecer las bases que permitan perfeccionar el sistema de atención a las ciudadanas y ciudadanos en la Fiscalía General de la República.

El presente trabajo cuenta con tres capítulos, en el primero se ilustran los antecedentes de la protección de los derechos de los ciudadanos en nuestro país desde el ordenamiento jurídico cubano y las principales tendencias en América Latina. El segundo muestra la situación actual que presenta la Fiscalía para el cumplimiento de esta función y un tercero en el que se evalúan los resultados obtenidos de la aplicación de los métodos empleados y las bases que se proponen para la elaboración de una norma interna adaptada a las necesidades actuales de la atención a los ciudadanos en nuestro Órgano.

El aporte de la investigación consiste en la propuesta de bases para una normativa interna que regule el sistema de atención a los ciudadanos que acceden a la Fiscalía, a partir de las posibilidades que se han brindado, que por las características de los asuntos que se investigan y que se relacionan directamente con el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de las personas, son de uso exclusivo de la institución.

El valor práctico está dado por el hecho de perfeccionar el sistema que actualmente se aplica, y que tribute directamente a ampliar las posibilidades de intercambio de los ciudadanos con el Órgano, y garantizar la profundidad y multilateralidad de la investigación que se realiza, en función de dar solución a las distintas problemáticas que se denuncian, accionando con las entidades estatales en función de lograr el resta-

blecimiento de la legalidad cuando ha sido quebrantada, informando además al resto de los organismos que de un modo u otro requieren de este conocimiento, para pronunciarse en erradicar las causas y condiciones que las propician, y que incide directamente en el cumplimiento de uno de nuestros objetivos de trabajo.

El valor social está dirigido a lograr un adecuado desempeño de los fiscales y su personal de apoyo y una mayor calidad del servicio que recibe la población, en la búsqueda de orientación y solución a las problemáticas que plantean, en cumplimiento además del objetivo de trabajo No. 16 del Partido Comunista de Cuba, aprobado en su Primera Conferencia Nacional, que presupone exigir y comprobar que en las instituciones y en el propio Partido, se preste oportuna y debida atención a las quejas, denuncias y otros asuntos planteados por la población y que las respuestas se brinden con el rigor y la celeridad requeridos.

Conclusiones

1. La Fiscalía, en el cumplimiento de su función de controlar la Legalidad Socialista, desempeña un importante papel en la protección de los derechos de los ciudadanos, y para ello, cuenta con un Sistema de Atención que garantiza el cumplimiento de su mandato constitucional, de ejercer el control de la legalidad y la protección de estos en el ejercicio legítimo de sus derechos e intereses, y como parte integrante de la sociedad, requiere de elevar la calidad de este servicio, para coadyuvar a la implementación de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución.

2. Esta transformación incluye el perfeccionamiento de la atención a los ciudadanos, la tramitación de las quejas, reclamaciones y denuncias que presentan sobre presuntas violaciones de sus

derechos, el que requiere normarse para lograr la uniformidad de la labor que se realiza y establecer los procedimientos para dar respuesta a los planteamientos de diversa índole que se reciben, a partir de la puesta en funcionamiento de vías alternativas de atención, en cumplimiento de los requerimientos actuales de la actividad, que quedaron claramente identificados con la aplicación de instrumentos de diagnóstico que permitieron, además, realizar propuestas para su perfeccionamiento.

3. Las propuestas son flexibles, aplicables y están encaminadas a erradicar las insuficiencias que atentan contra la calidad de la actuación del fiscal en la Atención a los Ciudadanos, por lo que posibilitará adaptarla labor que se realiza, a las exigencias actuales en busca de la excelencia de este proceso.

Bibliografía (selección)

Colectivo de Autores. 2000. *Introducción a la Dirección*. Compilación de textos. CETED-UH. Material Digitalizado Complementario utilizado en las Clases del Diplomado en Administración Pública.

Castro Ruz, Raúl. 8 de noviembre de 1995. *Indicaciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz, sobre la Atención a la Población*. Oficina del Segundo Secretario del Comité Central.

García García, Alejandro. 1995. *Diagnóstico General de Dirección de la Fiscalía Provincial de Villa Clara*.

García García, Alejandro. 1996. *Perfeccionamiento de la Gestión de Recursos Humanos en la Fiscalía Provincial de Villa Clara*.

Gómez Parets, Calixto. *Técnicas para la búsqueda de soluciones creativas*. Material Digitalizado complementario

utilizado en las Clases del Diplomado en Administración Pública.

Machado Noa, Noyla. *Control de gestión. Apuntes para su aplicación en las organizaciones*. Material Digitalizado Complementario utilizado en las clases de la Maestría en Dirección. 10ma. Edición.

Milián Gómez, Jorge Freddy. 2016. *La Atención Ciudadana y la Administración Pública*.

Lizarro Barbosa, Leticia Cristina. 2009. *Los procesos de las asambleas constituyentes de Bolivia Ecuador y Venezuela: la institucionalización de otros paradigmas*.

Ibarra, F. S/A. *Metodología de la investigación social*. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela.

Prieto Valdés, Martha y Lissette Pérez Hernández. 2004. *Reflexiones en torno al carácter normativo de la Constitución*. Temas de Derecho Constitucional Cubano. La Habana: Editorial Félix Varela.

Constitución de la República de Cuba.

Ley No. 83, "Ley de la Fiscalía General de la República". 11 de julio de 1997. Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria especial No. 8.

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Abril 2011. La Habana, Cuba

Instrucción Metodológica No. 4 de 2004 de la Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos de la Fiscalía General de la República.

Resolución No. 2 de 2012 del Fiscal General de la República sobre el perfeccionamiento de la Atención a la población.

Resolución No. 2 de 2015 del Fiscal General de la República sobre el perfeccionamiento de la Atención a los Ciudadanos.

Resolución No. 1 de 2017 del Fiscal General de la República sobre Proyección Estratégica para el período 2017-2021 en la Fiscalía General de la República.



HACIA UNA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA FAMILIAR PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN SITUACIONES DE RIESGO Y DESAMPARO POR LA MIGRACIÓN DE SUS PADRES

La familia cubana ha sufrido las consecuencias del fenómeno migratorio, si bien es cierto que los desplazamientos del ser humano hacia distintas áreas en el planeta han acompañado su propio devenir, también lo es el hecho de que la emigración cubana ha estado marcada por relaciones migratorias de carácter histórico, determinadas por distintos factores: geográficos, económicos, políticos, culturales y sociales; trayendo consigo una repercusión significativa para la estructura familiar y vulnerabilidades en el cumplimiento de los deberes emanados de las relaciones paterno-filiales (Rodríguez Portuondo, 2016).

En los procesos migratorios existen fenómenos que se vinculan con la niñez y hacen que los infantes constituyan un grupo vulnerable en sus derechos, colocando a los niños en situaciones desfavorables a sus derechos durante el acaecimiento de hechos en el acto de migrar y el país receptor, además de que se generan circunstancias desfavorables ante la migración de sus padres en el territorio del estado emisor, lo que constituye nuestro objeto de estudio. Estas últimas, los cualifican en niños y niñas en situaciones generales de riesgo y los que quedan sin amparo.

Las relaciones paterno-filiales suponen un conjunto de obligaciones, definidas perfectamente en nuestro Código de Familia. Sin embargo, a más de cuatro décadas de su promulgación y aunque ha sido analizado en múltiples ocasiones con vistas a su modificación, se hace necesario revisar su contenido y buscar las vías que garan-

MSc. ALICIA CAMUÉ TORRES

FISCAL

DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA

FISCALÍA PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CUBA



DRA. C. ODETTE MARTÍNEZ PÉREZ

PROFESORA UNIVERSIDAD DE ORIENTE



ticen efectivamente su total cumplimiento en función del interés superior del menor, enarbolado en la Convención de los Derechos del Niño adoptada el 20 de noviembre de 1989.

Muchos han sido los análisis que sobre el Código de Familia se han realizado, sin embargo, nadie se ha planteado, al menos con seriedad científica, la repercusión de las migraciones en el derecho familiar y dentro de este específicamente en las obligaciones derivadas de las rela-

ciones paterno-filiales, particularmente la patria potestad, guarda y cuidado de los hijos.

De la misma manera, resultan insuficientes los esfuerzos por dotar al país de un procedimiento de familia, recogido en una norma de alto rango y que estructure el mecanismo de solución de los distintos procesos que se suscitan en el escenario actual. La consecuencia más inmediata de esta realidad está dada por la imposibilidad de mecanismos legales eficientes para alcanzar la materialización de la justicia.

Participación del Ministerio Fiscal en el procedimiento familiar actual y posibilidades de actuación ante una nueva institución familiar.

Pudiéramos pensar que están creadas las instituciones jurídicas necesarias, tal y como define nuestro Código de Familia, ante los incumplimientos de los deberes y obligaciones de los padres para con sus hijos; pero nos referiremos a las circunstancias que surgen cuando, sin incumplir con los deberes y obligaciones, no pueden cuidar, ni proteger a sus hijos, quedando los mismos en unión de familiares y parientes.

Lo que motiva a que las autoras de este trabajo expongan algunas interrogantes que han surgido de la práctica jurídica:

¿Ante la ausencia temporal del país de los padres con patria potestad de un menor de edad por razones de estudio, trabajo, situaciones familiares y otras razones, quien se ocupa de representar a los menores dentro del territorio nacional?

¿Existen instituciones en nuestra actual norma familiar que contemplen la existencia de menores en estas situaciones?

¿Pueden los familiares de menores en estas situaciones brindar la debida protección a los mismos?

Realizándose un análisis técnico - jurídico no se vislumbran actualmente soluciones a ninguna de las interrogantes, sin embargo, la preocupación estatal por los niños, niñas y adolescentes, nos obliga a la búsqueda de soluciones legales a cada uno de los posibles problemas que estos pudieran enfrentar y que vulnerarían sus derechos.

Resulta preocupante la imposibilidad de poder representar debidamente a nuestros infantes, cuando por alguna razón los padres con patria potestad no pueden hacerlo, o se ven impedidos de hacerlo temporalmente.

Por otra parte, a disímiles situaciones se enfrentan las personas que dentro o fuera del seno familiar deciden proteger a los pequeños hasta que los padres puedan hacerlo. Quizás instituciones como la tutela, la guarda y cuidado y la adopción resolverían la situación, pero nos referimos a padres que no han incumplido con sus deberes y que dejan debidamente protegidos a sus vástagos en el seno del hogar, bajo la responsabilidad de la familia.

En el orden jurídico, la ausencia de la actualización de la normativa vigente a las nuevas realidades que desde hace años se viene presentando en el país, trae como consecuencia la dificultad de la materialización de las obligaciones que se derivan del ejercicio de las relaciones paterno-filiales. Sin que las nuevas modificaciones que dispone el Decreto Ley No. 302 del 11 de octubre de 2012, modificativo de la Ley No. 1312 "Ley de Migración", en la que aunque se define la calificación del ciudadano cubano emigrado¹, nada refiere a la problemática que enfrentan los familiares que quedan con el cuidado temporal de los infantes.

Independientemente de lo anterior, realizar una adecuada valoración en el seno de las familias de las personas que por este u otros conceptos viajan al exterior, incluso por la gestión a título personal de contratos de trabajo o por visitas a familiares, impone retos en cuanto a la constitución de la misma; siendo el caso, de si existen menores de edad, cuál es el rango de edad promedio, cuáles son los parientes que quedarían al cuidado de los mismos, sin estar en condiciones objetivas y subjetivamente identificados y responsabilizados para asumir esta tarea.

En tal sentido, se han producido objetivamente hechos con trascendencia jurídica, en los que se han visto involucrados menores de edad pertenecientes a familias que se desenvuelven en la controversial situación de la ausencia de la figura materna o paterna, por encontrarse emigrados ambos o uno de ellos. (Charles Sotelo: S/A)

Situaciones estas que califican a niños y niñas en situaciones

¹ Artículo No. 9.2. Se considera que un ciudadano cubano ha emigrado, cuando viaja al exterior por asuntos particulares y permanece de forma ininterrumpida por un término superior a los 24 meses sin la autorización correspondiente, así como cuando se domicilia en el exterior sin cumplir las regulaciones migratorias vigentes.

generales de riesgo y los que quedan sin amparo. Conceptualizando las categorías citadas por la Organización Internacional sobre las Migraciones, como menores en situación de riesgo aquellos que por cualquier índole resultan perjudicados en su desarrollo personal o social, y las situaciones de desamparo se producen a causa del incumplimiento, e imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección, establecidos por las leyes para la guarda y cuidado de los menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia y protección moral o material.

Ante cualquier situación legal, como representar debidamente a los niños que se encuentran en estas circunstancias. El artículo No. 48 de la Ley de Trámites Civiles, autoriza la participación del fiscal, solo en los casos en que los menores tengan intereses contrapuestos con los padres o carezcan de representantes legales. ¿Acaso estos menores están en estas situaciones?

Por supuesto que no, por razones estudiantiles, laborales, familiares, económicas u otras, resulta necesario que la familia, como históricamente ha ocurrido en nuestro país, quede con la guarda temporal de los menores del hogar, para que los padres puedan cumplir sus metas y aspiraciones, las que a su vez redundan en el bienestar de los niños. Pero no se puede dejar a un lado la adecuada protección de estos en el interior de los estados, y en tal sentido, no se aprecia institución alguna que de manera temporal proteja a los mismos, hasta que los obligados puedan ocupar sus responsabilidades.

Nuestra norma familiar no contempla la protección temporal de los menores, como si dispone la Norma ecuatoriana, la boliviana y la española, entre otras con diferentes contextos sociales, pero con un sujeto común: los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, ante la inquietud de familiares de menores inmersos en esta problemática, resulta adecuado valorar el tema, nuestro Código de Familia, después de ser la norma más revolucionaria de América Latina,

queda a la zaga en muchos aspectos y si bien con disposiciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular (CGTSP) se ha reglamentado el procedimiento familiar en el país, es hora de disponer de instituciones que permitan no solo proteger a nuestros niños ante la ausencia temporal de los padres, sino que también las autoridades puedan pronunciarse para poder exigir responsabilidad a quienes asuman la protección de un menor y no cumplan con el cargo.

Hoy se dan soluciones a casos muy específicos, amparándose el órgano jurisdiccional en la Convención de los Derechos del Niño, sin que, a pesar de ser ratificada por nuestro Estado, exista una norma que contemple sus postulados, amparándonos en la misma cuando no existe otra que dé respuesta a una situación legal específica, siempre teniendo en cuenta lo más beneficioso para los menores.

Tal es el caso, de la regulación en resoluciones judiciales de la comunicación del menor con sus parientes y allegados; y el derecho de estos familiares a exigir que se defina la misma por el tribunal, entre otros supuestos.

Situaciones muy parecidas ocurren cuando el fiscal es llamado ante la firma de escrituras notariales, donde el menor es beneficiado en cuentas bancarias, testamentos o deben adjudicarse bienes que se les pretende donar, en estos casos son los padres, si no concurren o son parte de los instrumentos notariales, los que deben representar a sus hijos en el instrumento.

Pero qué sucede si no están en el territorio nacional, recordemos que si no están privados o suspendidos, el fiscal no puede acudir, tampoco el familiar que se ocupa temporalmente del infante, entonces el niño debe esperar que sus padres regresen para adjudicarse el testamento, ahora bien, y si no es el único beneficiado, acaso los demás deben aguardar por ese padre imposibilitado de acudir.

Consideramos que aunque nuestros Tribunales Populares, ante el vacío legislativo que actualmente enfrenta nuestro país en materia de derecho familiar, dan respuestas a las problemáticas que surgen en la práctica jurídica, con la aplicación de los tratados internacionales, resulta necesario que los postulados de la Convención de los Derechos del Niño se integren definitivamente en nuestra norma familiar, ya que, en cuestión de protección a menores, cada día a nuevos desafíos deberá enfrentarse nuestra norma familiar.

Finalmente, ante la problemática ya planteada, bien pudieran tenerse en cuenta las soluciones aportadas por las legislaciones escogidas, las que nos permitirían contar con un mecanismo de protección efectivo para resolver las cuestiones relacionadas con los menores, en caso de que los padres decidan emigrar del territorio nacional, sea de forma definitiva o temporal, atemperándose, en tal sentido, el procedimiento familiar.

Propuesta sustentada en las entrevistas realizadas a profesores de enseñanza primaria, de escuelas deportivas, médicos de la familia, fiscales, jueces y abogados, concluyendo todos que en el orden psicológico, las ausencias prolongadas de los padres afectan de una manera u otra a los niños, sin embargo, la traumática situación pudiera ser menos agresiva si el infante quedara bajo la protección de parientes allegados o con personas con las que tenga afinidad como última instancia, y que puedan ejercer una protección efectiva y con responsabilidad.

Muy distinto resultaría si, ante la ausencia temporal de los progenitores, estos menores fueran acogidos o colocados bajo la protección de la familia, ejerciendo sobre estos las funciones de tutela y tenencia un familiar determinado judicialmente, tal y como sucede en los ordenamientos jurídicos de España, Bolivia y Ecuador, contando nuestro ordenamiento jurídico con las condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento de esta novedosa institución, que sería regulada en nuestra norma familiar.

Para estos supuestos, pudieran los progenitores o el progenitor sobreviviente o con patria potestad, una vez adoptada la decisión de emigrar, en caso de existir hijos menores de edad, presentarse ante las Secciones de Familia de los Tribunales Municipales Populares, mediante representación letrada, para establecer el asunto por las reglas de la jurisdicción voluntaria, que bien pudiera denominarse de Acogimiento Familiar, para nombrar o proponer al pariente que consideren más adecuado para la representación legal temporal del o los menores, con las mismas prerrogativas que concede el cargo de tutor. Institución que proponemos se incluya en nuestra norma familiar en el TITULO II De las Relaciones Paterno Filiales, y dentro del CAPITULO III, crear una SECCION SEGUNDA, que bien pudiera denominarse OTRAS FORMAS DE PROTECCION A MENORES DE EDAD, donde se enmarcaría la institución que

se propone.

Para su tramitación, una vez presentado el escrito promocional ante el órgano jurisdiccional, este deberá dar cuenta al fiscal, tal y como prevé la Instrucción No. 216/12, para que conteste conforme a lo más beneficioso para el o los menores, siempre velando el interés superior del niño, dándose el curso legal establecido para los procesos de esta naturaleza.

Para que, emitida la sentencia o resolución judicial definitiva sea presentada la misma ante las autoridades migratorias correspondientes, quedando constancia de la protección del menor o de los menores de edad dentro del territorio nacional, hasta que sus padres retornen y asuman todas las responsabilidades que les confiere la patria potestad, pudiendo, tal y como se dispone en la normativa española, comprobar, al menos semestralmente, la situación del menor, y promover ante el juez las medidas de protección que estime necesarias. Sin que se exima a la entidad pública de su responsabilidad para con el menor y de su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías que observe. Para que en caso de ser necesario se revoque el cargo de acogedor familiar y se disponga el acogimiento de los menores en instituciones estatales, hasta el regreso de los progenitores al país.

Conclusiones

Primero: Se pudiera, en los casos en que por razones de índole personal el padre con patria potestad decidiera abandonar temporal o definitivamente el territorio nacional, presentar ante las autoridades migratorias la resolución judicial donde se defina la persona o familiar que se queda a cargo del menor durante la ausencia de estos.

Segundo: En los supuestos en que los padres cumplan misiones internacionalistas o de colaboración, pudieran los ministerios involucrados emitir las disposiciones para que se garanticen por las autoridades encargadas de la tramitación de la documentación, la inclusión de la resolución judicial donde se defina qué persona o familiar queda a cargo del menor durante la ausencia de estos, desde el mismo instante en que se brinde la disposición a cumplir la misión.

Tercero: Que las autoridades migratorias exijan a las entidades laborales que avalen la veracidad de las declaraciones, en los casos en que no existan hijos menores de edad, en los casos en que la salida del país se realice por esta vía.

Cuarto: Que en los casos en que la salida del territorio nacional sea por intereses personales se presente acta de declaración jurada realizada ante notario público por los padres, donde se declare bajo juramento la no existencia de descendencia menor de edad en el territorio nacional, ya que

en caso de tener hijos debe constar la ya mencionada resolución judicial.

Con estos comentarios, consideramos que es hora de que definitivamente se inserten los postulados de la Convención de los Derechos del Niño en nuestra normativa familiar, la que ha quedado a la zaga del desarrollo de la sociedad, surgiendo figuras que necesitan una debida protección y como de menores tratamos, nada de lo que se proponga en cuestión de protección de sus derechos será suficiente “el futuro de la humanidad descansa en los hombros de nuestros niños, niñas y adolescentes, es un deber y una obligación de nuestra generación protegerlos”.

En tal sentido, con el estudio que se realiza se pretende, una vez concluido, proponer a la Comisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, las siguientes Modificaciones:

Primero: La Ley de Procedimiento Civil Administrativo Laboral y Económico en el sentido de que, una vez adoptada la decisión de emigrar, en caso de existir hijos menores de edad, los progenitores, el progenitor sobreviviente o con patria potestad deberán presentarse ante las Secciones de Familia de los Tribunales Municipales Populares, mediante representación letrada para establecer el asunto por las reglas de la jurisdicción voluntaria, que bien pudiera denominarse de Acogimiento Familiar, para nombrar o proponer al pariente que consideren más adecuado para la representación legal temporal del o los menores, con las mismas prerrogativas que concede el cargo de tutor.

Segundo: El Código de Familia, en el sentido de que, se incluya en nuestra norma familiar, en el TÍTULO II De las Relaciones Paterno Filiales, y dentro del CAPÍTULO III, crear una SECCION SEGUNDA, que bien pudiera denominarse OTRAS FORMAS DE PROTECCION A MENORES DE EDAD, donde se enmarcaría la institución de Acogimiento Familiar que se propone.

Tercero: Modificar la Instrucción No. 216/12, para que una vez presentado el escrito promocional ante el órgano jurisdiccional, este deberá dar cuenta al fiscal, tal y como prevé esta Instrucción, para que conteste conforme a lo más beneficioso para el o los menores, siempre velando el interés superior del niño, dándose el curso legal establecido para los procesos de esta naturaleza.

Bibliografía (selección)

Alfaro Guillén, Yanet y Carlos Manuel Díaz Tenreiro. 2013. *Compilaciones de Disposiciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular*. La Habana, Cuba: Ediciones de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Albaladejo, Manuel. 2006. *Curso de Derecho Civil*. Tomo IV, “Derecho de Familia”. España: Editora Edisofer.

Charles Sotelo, Linet. S/A. Impacto de las migraciones en la familia. Desafíos para la actuación del Fiscal en la protección a menores de edad inmersos en procesos civiles cuyos padres se encuentran emigrados.

Código de la Niñez y la Juventud, de 1978.

Colectivo de Autores. 1980. *Manual del Derecho Romano*. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación.

Constitución de la República de Cuba.

Convención sobre los Derechos del Niño. 1989.

Engels, Federico. 1972. *El Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*. La Habana, Cuba: Editorial Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro.

Fernández Martínez, Marta. 2004. *La representación en el Derecho Civil. Compendio de Derecho Civil*. Coordinadora Caridad del Carmen Valdés Díaz. La Habana, Cuba: Editora Félix Varela.

Gómez Treto, Raúl. julio-septiembre 1988. *¿Hacia un nuevo Código de Familia?* Revista Cubana de Derecho. Año XVII, Número 34. La Habana, Cuba: Editorial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Ley No. 1289/ 1975 “Código de Familia”.

Ley No. 59/1987 “Código Civil”.

Ley No. 83, “Ley de la Fiscalía General de la República”. 11 de julio de 1997. Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria especial No. 8.

Rodríguez Portuondo, Kirenia. 2016. *Menores en tierra de nadie por el fenómeno migratorio. Guarda y cuidado en Cuba: una señal de auxilio*. Evento Abogacía 2016.

EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN CUBA. CONTRIBUCIÓN DE LA FISCALÍA RESPECTO AL TEMA

De todas las etapas evolutivas, la vejez es la que más limitaciones provoca en los seres humanos, pues en ella comienzan a perderse diferentes capacidades, tanto intelectuales como físicas, las cuales se van acentuando a partir de los 60 años.

El envejecimiento poblacional en Cuba constituye el principal problema demográfico, con una cifra que alcanza el 19,2 por ciento de la población con 60 años y más, y se espera que para el 2025 este grupo alcance más del 25 por ciento de la población total, siendo uno de los países más envejecidos de América Latina.

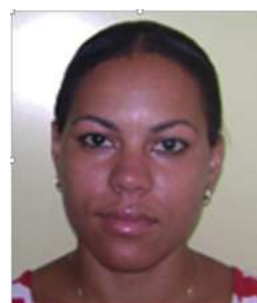
El progresivo envejecimiento poblacional, entendido como el aumento de la proporción de personas de 60 años y más, con respecto a los otros grupos de edades, está considerado actualmente el principal reto de muchos países desde el punto de vista demográfico, entre ellos Cuba, por la repercusión político-social y económica que representa, aspectos que marcan la necesidad de tutela que amerita ese sector poblacional en situación de vulnerabilidad, así como que el Estado y las autoridades de salud diseñen estrategias y realicen acciones para garantizar que las personas envejecidas sean más saludables y disfruten de mayor calidad de vida, ya que hoy el promedio de sobrevivencia de los cubanos es de 78,45 años.

Al ser Cuba uno de los países que enfrenta el envejecimiento poblacional de manera dramática, dado que se agudiza su situación en estos tiempos cuando se trabaja aceleradamente en la actualización del modelo económico, se impone para el análisis particular de este fenómeno pro-

LIC. YUDELKYS ARESTUCHE TORRES

FISCAL

FISCALÍA PROVINCIAL DE MATANZAS



fundizar en las causas y consecuencias del mismo, así como en los retos y estrategias del Estado cubano y de la sociedad en general sobre el tema.

La Fiscalía General de la República, como Órgano del Estado cubano que cumple misiones diversas en el control de la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos, también ha contribuido a contrarrestar los efectos de este fenómeno, mediante la emisión de normativas e indicaciones relacionadas con el tema, que han conllevado a realizar acciones concretas en aras de la protección integral de los adultos mayores.

Se plantea como problema científico el siguiente: ¿Se lleva a cabo una eficaz protección de los derechos del adulto mayor en Cuba?, para lo que se definió como hipótesis que “Resulta necesario introducir modificaciones legislativas e incrementar las acciones del Estado y de la Fiscalía en específico, que permitan una protección eficaz de los derechos del adulto mayor”.

La motivación principal de esta investigación es precisamente la trascendencia e impacto del incremento del enve-

jecimiento poblacional en Cuba, que demanda del Estado y de la sociedad una protección eficiente a los ancianos, debido a la vulnerabilidad que presentan, por lo que nos trazamos como objetivo general demostrar la necesidad de brindar una efectiva protección de los derechos del adulto mayor.

Capítulo III: Papel de la Fiscalía en la protección de los derechos del adulto mayor.

La Fiscalía General de la República es el Órgano del Estado cubano al que le corresponde como objetivo fundamental el control y la preservación de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos, y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, según lo establecido en el artículo No. 127 de la Constitución.

Igualmente, el artículo No. 63 de la Constitución refrenda el Derecho de todo ciudadano de dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinente, y la Ley No. 83 de 1997 de la Fiscalía General de la República, establece como uno de sus objetivos proteger a los ciudadanos en el ejercicio legítimo de sus derechos e intereses, entre los que se encuentran los adultos mayores, segmento poblacional al que se le presta especial atención por el órgano fiscal, a partir del envejecimiento poblacional que se advierte en la sociedad cubana actual, con una avanzada transición y con el objetivo de garantizar la protección integral de los mismos.

Su máxima expresión se evidencia en el perfeccionamiento y creación de nuevos espacios dedicados al ciudadano para la protección de sus derechos y la preservación de logros sociales, con el objetivo de cumplir con eficiencia las funciones constitucionales y por ley asignadas y contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad en el país.

Con dicha finalidad, se dictó por el Fiscal General de la República la Resolución No. 2 de 2015, sobre el Sistema de Atención de la Fiscalía General de la República dirigido a ciudadanos y ciudadanas, la cual contiene un conjunto de normas, principios, objetivos y acciones, que permiten elevar la eficacia y eficiencia de las funciones que ejerce el fiscal para la preservación de la legalidad y la protección de los derechos de las personas, sustentándose dicha norma en el respeto a los postulados de la Constitución de la República y de la Ley No. 83 de 1997, la actuación bajo el principio constitucional de igualdad de los seres humanos y proscripción de todo tipo de discriminación, vincular la profesionalidad como valor, con el respeto, la dignidad y el humanismo y la contribución a la educación jurídica de los ciudadanos.

En el artículo No. 5 de la mencionada Resolución se dispone que el sistema de atención se rige por los objetivos establecidos en el artículo No. 127 de la Constitución y en la Ley No. 83 de 1997 de la Fiscalía General de la República y se propone, entre otros objetivos, el de proteger los derechos de las personas, y especialmente a quienes integran sectores vulnerables, entre ellos los ancianos.

Esta Resolución tiene como novedoso la constitución de vías alternativas para el contacto directo con la Fiscalía, que son la atención a ciudadanos y ciudadanas por la Línea Única, el correo electrónico y el sitio web, los cuales se desarrollan simultáneamente a la atención personalizada, y crean nuevos espacios dirigidos a la protección de las personas, fundamentalmente de ancianos y discapacitados y a la preservación de la legalidad.

Actualmente, se trabaja en función de la implementación de una nueva vía de acceso de los ciudadanos a la Fiscalía, que es la creación del buzón, el cual ha sido colocado en las fiscalías del país, con el objetivo de que en cualquier horario y día se pueda recibir correspondencia de los ciudadanos, lo que igualmente beneficia a los ancianos, los cuales podrán enviar sus escritos de forma personal o a través de terceras personas.

Estas nuevas formas de atención al ciudadano, facilitan al anciano realizar sus planteamientos, solicitando la orientación necesaria respecto a una determinada situación que presente o denunciando la presunta violación de sus derechos, entre otras cuestiones, sin la necesidad de acudir a la sede de la Fiscalía.

A dichos planteamientos se le presta una atención priorizada, debiéndose hacer alusión a los mismos en el parte diario dispuesto en la mencionada Resolución, el cual se envía diariamente a la Fiscalía General de la República con el comentario correspondiente, donde se debe hacer referencia, además, a las acciones realizadas por el fiscal o el tratamiento dado al asunto planteado, dándole el seguimiento correspondiente en el caso de así requerirlo.

Esta labor de la Fiscalía, en función de la atención al ciudadano y en especial al adulto mayor, entre otros sectores

vulnerables, contribuye a elevar la calidad de vida del anciano y a la protección de sus derechos.

En marzo, solo en un mes del presente año, fueron atendidos 868 ancianos en las fiscalías de todo el país.

En la Fiscalía Provincial de Matanzas, al finalizar el mes de abril, se han atendido 84 ancianos y durante el 2016 fueron atendidos, por las diferentes vías, 467 ancianos, predominando la atención directa o personalizada.

Entre los principales temas planteados se encuentran los problemas de convivencia, conflictos familiares y de vecindad, y las denuncias que presentan sobre temas de corrupción e ilegalidades.

No obstante, se propone, a partir del estudio realizado sobre el tema, que la labor de la fiscalía en la protección de los derechos de los ancianos vaya más allá de su libre espontaneidad, lo que se podrá lograr a través de la nutrición de informaciones provenientes de otros órganos, como las direcciones de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública, entre otros.

Igualmente, en las visitas que se efectúan por el fiscal de atención al ciudadano a zonas de difícil acceso, se debe profundizar más acerca de la existencia de ancianos que vivan solos o se encuentren desprotegidos, y sin embargo, no acuden al fiscal en su visita, los cuales pueden ser visitados en sus viviendas, en aras de que puedan solicitar orientación o la actuación de la Fiscalía en el caso de así requerirlo y cuando lo necesiten.

Además, se propone que, dado el envejecimiento poblacional que se presenta, y su incremento para el futuro, así como la vulnerabilidad de este segmento poblacional, se le dé a los ancianos similar tratamiento que al de los menores, los cuales son controlados como menores víctimas de hechos delictivos y de otras conductas no constitutivas de delito, y de esta forma se le

daría más seguimiento y atención a estos casos, por una vía más expedita, pudiéndose lograr este objetivo con los incrementos producidos en la plantilla de los fiscales, una vez logrado su completamiento.

Otros de los escenarios en los que el fiscal contribuye a la protección de los derechos de los ancianos, es en las visitas de control de la legalidad que se efectúan a los Hogares de Ancianos y Casas de Abuelos.

A partir del incremento del envejecimiento poblacional que se advierte en la sociedad cubana actual y con el objetivo de garantizar la protección integral de los adultos mayores institucionalizados, se efectuaron indicaciones por la extinta Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos en mayo de 2016, para la intervención de la Fiscalía en el control de la legalidad a los Hogares de Ancianos y Casas de Abuelos.

Para la realización de estas visitas de control de la legalidad en dichas instituciones del MINSAP, se han creado equipos multidisciplinarios de trabajo con la participación de fiscales y asistentes, psicólogos de la Fiscalía y especialistas de Higiene y Epidermiología, alimentación (dietistas), atención primaria de Salud, Trabajo, Planificación Física y cuantos otros se consideren necesarios racionalmente.

En dichas visitas, se realizan acciones dirigidas a verificar si existen casos de hacinamiento, definir la existencia de familiares obligados a su cuidado, determinar si tienen bienes, precisando si se requiere alguna acción legal para la protección de sus derechos, comprobar la cantidad de ancianos declarados judicialmente incapaces, si tienen tutor, comprobar las condiciones de vida de los ancianos, entre otros.

Al concluirse, se confecciona un informe resumen con las principales violaciones detectadas y el estado de restablecimiento de la legalidad.

Estas acciones periódicas de control de la legalidad en dichos centros, contribuyen, sin lugar a dudas, a evitar que se vulneren los derechos de los ancianos internos y matriculados en los mismos, y a que sea restablecida la legalidad quebrantada en los casos en que se detecten violaciones.

De igual forma, son muchos los escenarios que tiene la Fiscalía, en aras de la protección legal de los ancianos, pues en cada una de las especialidades que se atienden en nuestro Órgano, se le brinda atención a los ciudadanos, de una forma u otra, por lo que dado el fenómeno abordado se realiza un llamado a lograr una atención priorizada a este segmento poblacional.

Conclusiones

- El envejecimiento poblacional en Cuba se incrementa progresivamente como fenómeno actual y futuro de significativa connotación.

- Las causas esenciales del envejecimiento poblacional se asocian a la disminución de la fecundidad, la emigración de la población joven y la reducción de la mortalidad.

- El envejecimiento poblacional representa un triunfo de la humanidad, al ser resultado del desarrollo médico y socioeconómico, pero trae consigo consecuencias principalmente en el ámbito laboral, familiar, de la seguridad social, en el cuidado institucional, entre otras, que repercuten en el futuro de la sociedad.

- El mejoramiento de las condiciones de vida de los ancianos y su asistencia es responsabilidad del Estado, sin embargo, los familiares y cuidadores desempeñan un papel importante en su aprovechamiento, a favor de una longevidad satisfactoria, por lo que es tarea priorizada por parte de organismos y organizaciones sociales de Cuba y de cada territorio en particular.

- Son requeridas, hoy en día, estrategias para incrementar la natalidad y mejorar las condiciones y calidad de vida del adulto, así como para la atención diferenciada, sistemática y de calidad del perfil de morbilidad, características de este grupo poblacional frágil y vulnerable.

- El sistema de garantías estatales en Cuba no satisface la protección integral y efectiva de los derechos del adulto mayor del siglo XXI.

- La Fiscalía General de la República, como Órgano del Estado al que le corresponde el control y preservación de la legalidad, también se encuentra inmersa en la protección de los derechos del adulto mayor, teniendo su máxima expresión en el perfeccionamiento y creación de nuevos espacios dedicados al ciudadano para el contacto directo con la Fiscalía, con especial atención a los sectores vulnerables

como los ancianos, así como la realización de visitas de controles de la legalidad que se efectúan a los Hogares de Ancianos y las Casas de Abuelos.

Recomendaciones

- Incrementar las acciones del Estado en la estimulación de la fecundidad, identificando su decrecimiento como principal causa de envejecimiento poblacional.

- Elevar la cifra de Hogares de Ancianos y Casas de Abuelos dada las proyecciones futuras del fenómeno de envejecimiento poblacional.

- Elaborar y desarrollar programas educativos dirigidos al perfeccionamiento de la vida familiar y a potenciar el cuidado de los ancianos para elevar su calidad de vida.

- Introducir modificaciones legislativas que permitan una protección eficaz de los derechos del adulto mayor.

- Potenciar, por la Fiscalía General de la República, la búsqueda de información sobre ancianos en situación de desventaja económica y social, con el objetivo de brindarles una atención jurídica de oficio, prestando especial atención a los que residen en zonas de difícil acceso.

- Ofrecer, por la Fiscalía General de la República, un tratamiento diferenciado a los ancianos, similar al de los menores víctimas.

Bibliografía (selección)

Anuario Estadístico de Cuba 2014. Oficina Nacional de Estadística e Información. Cuba.

Céspedes Hernández, Lauren y Lisandra Fariñas Acosta. *S/A. Cuba envejece ¿Éxito o Problema?*. Disponible en: <http://www.granma.cu>

Código de Familia

Código Penal

Constitución de la República.

Fariñas Acosta, Lisandra. 9 de mayo de 2017. *Cómo envejecemos... 25 años después*. Periódico Granma.

Fiscalía General de la República. *La lucha por la igualdad de derechos y contra la discriminación en Cuba*. Folleto divulgativo.

Fiscalía General de la República. Revista "Legalidad Derecho y Sociedad". 2016. Edición especial XIII Encuentro Internacional Ciencias Penales y Primer Evento Legalidad Derecho y Sociedad.

Ley No. 83, "Ley de la Fiscalía General de la República". 11 de julio de 1997. Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria especial No. 8.

TRIBUNAL NO 3. DIRECCIÓN, COMUNICACIÓN Y OTROS

INTEGRACIÓN DE PSICÓLOGOS Y COMUNICADORES EN EL TRABAJO CON EL PÚBLICO INTERNO, PARA PROPICIAR LA MOTIVACIÓN LABORAL EN EL DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZACIONES

“Somos lo que hacemos, principalmente lo que hacemos para cambiar lo que somos (...) La primera condición para cambiar la realidad consiste en conocerla”

Eduardo Galeano

Los seres humanos viven en sociedad, lo que directamente les convierte en seres sociales en constante interacción e interdependencia con el entorno. Es precisamente este intercambio, tanto interpersonal como intrapersonal, unido a factores biológicos, el que en gran medida determina el resultado final de la conducta humana. Comprender esta compleja relación ha llevado años y como resultado del mismo, se han suscitado numerosas investigaciones e intervenciones multifactoriales, que en la actualidad comienzan a ser referentes en el afán de impulsar un pensamiento proactivo a todos los niveles; sobre todo en el orden organizacional.

Nuestro país no se aísla de esta realidad y como parte de las transformaciones socioeconómicas en las que se encuentra inmerso, impulsa un reajuste en los sistemas laborales establecidos, que posibilita contar con equipos de trabajo más productivos y eficientes, en correspondencia con lo planteado en el Lineamiento No. 7 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, además, entiende que para ello resulta fundamental y decisoria la motivación de los integrantes de cada organización.

LIC. VANESSA RODRÍGUEZ LARA

PSICÓLOGA

FISCALÍA PROVINCIAL DE PINAR DEL RÍO



LIC. LUZ DEL ALBA LEMUS HERNÁNDEZ

COMUNICADORA

FISCALÍA PROVINCIAL DE PINAR DEL RÍO



Movidos por este propósito, la Fiscalía General de la República incorporó en sus estructuras laborales la imbricación de otras disciplinas científicas como la Psicología y la Comunicación, especialidades que centran su atención en el estudio del Hombre y, sobre todo, en su categoría biopsicosocial, permitiéndole al Órgano la investigación de los diversos fenómenos de colectividad y sus respectivas propuestas de soluciones.

Por tanto, con la incorporación en la Fiscalía Provincial de Pinar del Río, en el 2015, de especialistas de estas disciplinas se han ido suscitando un conjunto de cambios, sobre todo a lo interno de la organización, que han impactado positivamente en los resultados generales de trabajo; así como en la calidad de vida y motivación laboral de sus miembros.

Por la importancia que reviste esta integración entre psicólogos y comunicadores en el trabajo con el público interno, para propiciar la motivación laboral en el desempeño de la Fiscalía Provincial de Pinar del Río, se plantea el siguiente objetivo general:

- Evaluar la importancia de la integración de psicólogos y comunicadores en el trabajo con el público interno, para propiciar la motivación laboral en el desempeño de las organizaciones en la Fiscalía Provincial de Pinar del Río.

Capítulo I: Experiencias prácticas de la integración del psicólogo y el comunicador, y su impacto en la motivación laboral en el público interno de la Fiscalía Provincial de Pinar del Río.

Con la incorporación de estas dos disciplinas, en el 2015, en el Órgano, se diseñó un sistema de trabajo novedoso que permitió el acercamiento de ambas ciencias a las funciones de la institución; pero sobre todo, a la dinámica de interrelación de sus miembros.

La primera acción de socialización desarrollada fue un recorrido por cada unidad organizativa con el propósito de realizar la presentación oficial a los tra-

bajadores y, a su vez, que las especialistas adquirieran elementos esenciales como: características socio-demográficas, modos de interacción, enfoques comunicativos, sistemas de trabajo establecidos, principales figuras delictivas, motivaciones intrínsecas, cultura organizacional, estilos de dirección y liderazgo entre otros elementos compilados en una guía de observación elaborada para el recorrido.

El 1ro de diciembre de 2015, y por decisión del Fiscal Jefe Provincial, se inició la Evaluación del Clima Organizacional en el municipio Consolación del Sur, en el cual con anterioridad se habían definido un grupo de irregularidades de funcionamiento, que comenzaban a afectar el equilibrio emocional de los integrantes de esta unidad organizativa.

Después de estudiar y analizar un conjunto de técnicas científicas, para el abordaje a las organizaciones y de conjunto con especialistas del tema laboral de la Universidad “Hermanos Saiz Montes de Oca”, quedó definida una batería de técnicas de aporte panorámico, que fueron utilizadas en todos los municipios y departamentos para la obtención del Diagnóstico de Clima Organizacional; así como, la dinámica grupal para crear un adecuado rapport y evitar un innecesario desgaste psíquico.

Las técnicas utilizadas fueron:

- Observación (Ficha de observación de factores que interviene en el desenvolvimiento de las pruebas. Montserrat Moreno y Cecilia Thome).
- Entrevista semiestructurada (por la comunicadora y psicóloga).
- Cuestionario de Diagnóstico Organizacional (Basado en investigaciones realizadas por el colectivo de Profesores de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología, Universidad de la Habana (1964-2004). Versión Adaptada por A. Ávila (2005).
- Inventario para la Evaluación del Burnout (estrés) de Felicia Mirian González Llana.
- Escala de Modos de Afrontamiento al Estrés de Folkman y Lazarus (1984).

Principales resultados del diagnóstico en Consolación del Sur:

1. La confianza en la estructura directiva para potenciar e impulsar el trabajo de la organización no alcanzó adecuados niveles de aceptación y la comunicación intergrupal, a pesar de reflejar en algunos casos muestras de debilidad, no era atendida ni asistida.
2. Las relaciones jefe –subordinados no eran potenciadas reforzando la comprensión de particularidades y grupales y, en algunas ocasiones, no se logró resolver con justicia las reclamaciones que se hicieron por los subordinados.
3. La estimulación evidenció el estado más crítico de satisfacción y equilibrio de la organización, consideraron que no existía armonía entre resultados y reconocimientos, la diver-

sidad de opiniones no eran conjugadas ni concertadas y esto, por supuesto, provocó dificultades en las relaciones intergrupales.

4. Durante la observación, se comprobó la existencia de dificultades en cuanto a la comunicación no verbal: rostros rígidos, marcada ironía o “trato del profesional”, gestos bruscos y una articulación demasiado expresiva, evidenció la presencia de un conflicto latente, sobre todo en la proyección para con la dirección.

5. Existía una percepción medianamente aceptable acerca de la confianza que depositaba la dirección en los trabajadores, todo ello manifestado mediante las tareas que se les asignaban y el cumplimiento de estas.

6. El no ser reconocidos, por su creatividad e innovación, generó insatisfacción, ya que no eran potenciados e impulsados como principio rector de la estimulación individual de la organización.

Posteriormente, el 24 de diciembre, se decidió iniciar el diagnóstico del clima organizacional en el municipio Pinar del Río, a partir de reiteradas solicitudes de baja que llegaron al Departamento de Cuadros de la Fiscalía Provincial, en cuya fluctuación incidieron fundamentalmente fiscales de nuevo ingreso a la institución:

Principales resultados del diagnóstico en Pinar del Río:

1. Inexistencia de un sistema de estimulación y de espacios de diálogo con los trabajadores.

2. Incorrectos estilos de dirección y liderazgo, en cuanto al tratamiento de fenómenos de colectividad laboral.

3. No funcionamiento de espacios de socialización para potenciar valores, principios, preparación política ideológica, dentro de ellos fundamentalmente matutinos, vespertinos, reuniones de las organizaciones.

4. Inadecuado uso de la Comunicación como herramienta de dirección eficiente, promulgadora de soluciones.

5. Existencia de episodios de desmotivación, apatía, repulsión y desesperanza.

6. Ineficiente sistema de comunicación con la dirección de la provincia.

El 6 de septiembre de 2016, se realizó esta misma evaluación en el municipio Los Palacios y, a diferencia de los dos anteriores, no se poseía criterios sobre posibles conflictos laborales existentes en el territorio. Desde la propia entrada a la unidad organizativa, se percibió un desajuste en estilos de dirección y desalineados límites jerárquicos.

Principales resultados del diagnóstico en Los Palacios:

1. Ineficiente sistema de dirección con evidencia de debilidades en la organización, exigencia y distribución del trabajo.

2. El estilo de dirección apuntó hacia el método liberal, donde existían compromisos de dependencia emocional.

3. No existía un sistema de estimulación y reconocimientos, solo se concentraban en las actividades laborales.

4. No se percibió capacidad de influencia por parte de la dirección en el colectivo, sobretodo en el aspecto de dirección.

5. Impresionó ser un colectivo unido, pero con falta de liderazgo.

6. La inestabilidad cognitiva y emocional que existía era consecuencia de métodos de dirección desestructurados y sin equilibrios.

7. Bajo rendimiento en cuanto a nivel profesional.

8. Limitaciones en cuanto al espectro de la comunicación institucional.

Es necesario precisar que con la intervención oportuna y las correspondientes acciones llevadas a cabo en cada territorio se evitó:

- Mayor fluctuación de personal, sobre todo joven.

- La imposición de medidas disciplinarias a personal fiscal y no fiscal.

- Separaciones del cargo de fiscales jefes municipales.

- La agudización de conflictos laborales dentro del Órgano.

- Desvirtuar la imagen de la Fiscalía en sus públicos de actuación.

A partir de las debilidades identificadas en los municipios se acometieron un grupo de acciones dentro de las que se encuentran:

- Análisis en Comisiones de Cuadros de los resultados del diagnóstico con los fiscales jefes municipales de cada territorio involucrado.

- Reuniones con los colectivos laborales para debatir resultados del diagnóstico y evaluar causas y acciones a desarrollar (Pinar del Río y Los Palacios).

- Atención diferenciada por parte de los jefes de departamentos provinciales a estos territorios.

- Se facilitaron herramientas para el perfeccionamiento del ejercicio de dirección y estilos comunicativos.

- Despacho de las evaluaciones de perfiles psicológicos de los fiscales.

En la actualidad, se encuentra en proceso de evaluación del diagnóstico otro conjunto de municipios y departamentos, para los cuales se aplicarán las mismas técnicas recomendadas por los especialistas. Es importante señalar que para todos los casos se respetó la autonomía de dirección del territorio y su identidad.

Un elemento decisorio en una organización son los espacios habilitados para el intercambio y la socialización entre sus miembros. A partir de una invitación realizada a las especialidades de Psicología y Comunicación, a la reunión del consejo de dirección del mes de noviembre de 2015, se detectaron un grupo de deficiencias que afectaban el normal desarrollo del máximo órgano de dirección de la Fiscalía. Estas consideraciones se pusieron en conocimiento del Fiscal Jefe Provincial, el cual decidió se iniciara un estudio con posterior presentación, en un plazo de seis meses y extenderlo hasta el 2017.

Principales resultados:

1. Insuficiencias en cuanto al mantenimiento adecuado de procesos, como la atención y motivación durante el inicio y desarrollo del Consejo de Dirección.
2. Deficiencias en cuanto a la proyección de mensajes.
3. Dificultades en la recepción de críticas y/o señalamientos entre los miembros.
4. Carencia de espacios dentro del consejo de dirección para reconocimientos, tanto individuales como colectivos, que potencien motivación y reforzamiento positivo.

Acciones realizadas para contrarrestar las deficiencias:

- Al iniciar cada sesión de trabajo se establece un rapport que conlleve a propiciar un clima favorable para el desarrollo del intercambio: comentarios de sucesos positivos o trascendentales, propuesta de actividades a realizar, proyección de materiales audiovisuales motivadores.
- Desde la dirección del consejo se

mantiene un apego al tema, a través del debate constante, apelando a puntos de vistas y sugerencias para evitar la fatiga psíquica; así como rumores y reiterados comentarios.

- Se hace prevalecer el principio de respeto al otro, no atacando a la persona ni a la idea, transmitiendo un nuevo concepto partiendo de su punto de vista donde exista coherencia entre lenguaje verbal y corporal.
- Las críticas emitidas trasladan mensajes humanos, de optimismo, confianza, de posibilidad de superación, respetando las individualidades.
- Se vela por el respeto al secreto profesional.
- Se trabaja la autocritica y la capacidad de aceptación, evitando episodios con proyecciones no acordes a la disciplina del Órgano.
- Se potencia el principio de que el Consejo de Dirección es un emisor de mensajes de apoyo, estimulación y gratitud y así lograr que cada miembro alcance su pleno potencial.

Teniendo como referente los resultados del diagnóstico del clima organizacional, primer acercamiento investigativo al interior de nuestra Fiscalía, se han direccionado un grupo de acciones motivacionales que se encuentran recogidas en la Estrategia de Comunicación, en función de potenciar la motivación laboral, entendida esta como la “voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual” (Stephen Robbins).

Dentro de las que se destacan:

- Creación del plegable “PsicoComunícate”
- Creación de boletín informativo “Acércate”
- Elaboración del Manual de Técnicas Psicocomunicativas para el departamento de Atención a los Derechos Ciudadanos.
- Estudio de espacios formales (Consejo de Dirección)
- Ejercicio de dinámicas grupales en matutinos, reuniones con los jóvenes, talleres y otras actividades.
- Creación de diferentes espacios de intercambio: Festivales culinarios, de dominó; artesanales; así como el espacio interactivo “Conociéndonos más”, con la proyección de materiales audiovisuales como “El Secreto” y “Antes de que sea tarde”, todos de corte educacional y con temas novedosos.
- Asesoramiento a fiscales jefes municipales sobre diversas técnicas y herramientas para el manejo de fenómenos de colectividad laboral.
- Vinculación más estrecha del personal del Órgano con los jubilados del sector en intercambio de experiencias.
- Potenciación de la estimulación laboral mediante reconocimientos públicos, tanto en el orden individual como grupal, haciéndolos extensivos en comunidades, centros laborales y estudiantiles de familiares.

- Incremento de la orientación psicológica a personal del Órgano, así como a sus familiares, y en casos requeridos se complementa con la atención de otros especialistas (psiquiatras y personal médico).

- Despacho de perfiles psicológicos con fiscales jefes municipales, para propiciar el conocimiento del nuevo trabajador y posibilitar un proceso de adaptación más ajustado y motivador.

- Publicación en el FTP de todas las actividades que se realizan encada unidad organizativa.

- Exposición fotográfica, en formato digital, de los principales eventos acontecidos en municipios, provincia y nación.

- Creación del buzón “Comunicación interna” como canal de comunicación.

- Visita a lugares recreativos, culturales e históricos de la provincia.

- Vinculación más directa con los medios masivos de comunicación para la divulgación de la funciones del Órgano, buscando incentivar la identidad e imagen de nuestro público interno en el público externo.

- Sistematización de envíos de correos electrónicos con informaciones generales, resultados de trabajo del Órgano, trabajadores destacados, reflexiones, entre otras.

- Mayor vinculación de la Fiscalía con los diferentes grupos de jóvenes menores de 35 años.

- Incorporación en la estrategia de superación del órgano temas relacionados con liderazgo, cultura organizacional, estilos de dirección y motivación.

- Elaboración de planes de verano potenciando la recreación y el intercambio entre todos los trabajadores y sus familiares.

- Fortalecimiento de la labor investigativa en el público interno, donde se refuerzan temas para perfeccionar el funcionamiento del Órgano, como enfermedades profesionales, la estimulación, los valores y ética actual, los conflictos laborales.

Todas estas acciones han influido en variables organizacionales como la retención laboral, la estimulación, resultados de trabajo, cultura e identidad e indudable-

mente han posibilitado contar con mejores profesionales, más comprometidos y eficientes. Lo que demuestra el impacto de la motivación laboral en el público interno y su convergencia con los resultados de trabajo de una organización.

Conclusiones

1. En la actualidad, la comunicación y la psicología organizacional, han venido cobrando cada vez mayor protagonismo en el contexto institucional cubano, hasta el punto en que asumen como actividades consustanciales a las organizaciones y en consecuencia, se entiende que debe ser adecuadamente gestionada.

2. Es importante la integración lograda en la Fiscalía, como Órgano del Estado, entre estas disciplinas, para fortalecer el trabajo con el público interno e incentivar la motivación laboral, en aras de perfeccionar los resultados laborales de la institución y de una mayor efectividad en el cumplimiento de las misiones asignadas.

3. Las acciones desarrolladas alcanzaron un impacto favorable en el público interno, fundamentalmente en cuanto a: relaciones interpersonales, valores compartidos, estilos de dirección y liderazgo, identificación y compromiso con las funciones del Órgano

Recomendaciones

1. Continuar sistematizando la ejecución de acciones dirigidas a incentivar la motivación laboral en el público interno.

2. Institucionalizar la aplicación de técnicas para el desarrollo de los diagnósticos de clima organizacional.

3. Diseñar para el Órgano, la batería de técnicas de competencia profesional para los procesos de selección e ingreso de fiscales.

Bibliografía

Fernández Collado, Carlos (compilador). 1995. *La comunicación en las organizaciones*. México: Editorial Trillas.

González Rey, F. y H. Valdés Casal. 1994. *Psicología Humanista. Actualidad y Desarrollo*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Guzmán, M. 2008. *De la fenomenología existencial a la comunicación*. Razón y palabra No. 64. Recuperado de: <http://www.razonypalabra.org.mx/N/n64/actual/mrgarza.html>

Hernández Sampier, R. *Metodología de la Investigación*.

Moros, H., Díaz Pérez, M., Vázquez, M. y A. Ávila. *Guía Metodológica: Psicología Organizacional II*. Equipo de Profesores de Psicología Organizacional.

Muchinsky, P. M. 1994. *Psicología aplicada al trabajo. Introducción a la Psicología Industrial y Organizacional*.

Pérez Rojas, Luis Beltrán. 2006. *Aportes al objeto de estudio de la Comunicación, una respuesta desde la Psicología cognitiva*. Colombia: Universidad de Medellín.

Retórica-Aristóteles. S/A. En Wikipedia. Recuperado el 8 de diciembre de 2015 de: [https://es.wikipedia.org/wiki/Retórica_\(Aristóteles\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Retórica_(Aristóteles))

Rizo, M. 2006. *Comunicación Interpersonal. Introducción a sus aspectos teóricos, metodológicos y empíricos*. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Robbins S. 1998. *Comportamiento Organizacional*.

Trelles, Irene (compiladora). 2002. *Comunicación Organizacional*. Selección de textos. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela.

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR COMPETENCIAS DE CUADROS Y RESERVAS EN LA FISCALÍA PROVINCIAL DE VILLA CLARA

Hoy en día, en la era del conocimiento, el elemento diferenciador de las organizaciones lo constituyen los individuos que la componen. De este modo, el capital humano se convierte en el activo más valioso que posee una organización, destacándose por sobre los activos físicos y financieros, e incluso por sobre los demás intangibles. Este rasgo distintivo es la base del éxito organizacional actual y está constituido básicamente por las competencias de los individuos; que son en términos simples, conocimientos, habilidades y cualidades de sus integrantes. De ahí, la importancia de su gestión, puesto que estas competencias individuales, además de ser claves dentro de las competencias básicas distintivas organizacionales, son las encargadas de generar la competencia esencial, la cual permite obtener las ventajas competitivas sostenibles.

En los últimos años han surgido nuevos enfoques de gestión que buscan aumentar la efectividad para las organizaciones, en sentido general. La necesidad de inci-

MSc. CELENYS CASTRO RODRÍGUEZ

FISCAL JEFA

DEPARTAMENTO DE CUADROS

FISCALÍA PROVINCIAL DE VILLA CLARA



dir en los cambios organizativos y tecnológicos, que se producen en el macro y micro entorno, influyen de forma directa o indirecta sobre las organizaciones, esto conlleva a la aplicación de nuevos enfoques en los que el hombre desempeña un papel determinante dentro de la organización, por sus conocimientos, habilidades y valores, es decir, por sus capacidades y como estas tributan al desarrollo de competencias a nivel organizacional.

En Cuba se ha comenzado a hablar de gestión integrada del capital humano, basada en un modelo de gestión diseñado en correspondencia con las necesidades de las organizaciones, cuya base lo constituyen las competencias laborales, enunciadas como el factor por excelencia de la gestión integrada del capital humano y además de expresar un desempeño laboral superior que refleje la cultura y los valores de la organización.

La Fiscalía Provincial de Villa Clara necesita sumarse a las múltiples transformaciones que se vienen produciendo en el país, por lo cual, no asiste como observador pasivo a esta dinámica, sino que ha realizado múltiples acciones, desde el diagnóstico hasta la concreción de algunas actividades, para sumarse a un proceso de cambio que se viene generando desde la Fiscalía General de la República como organismo rector.

En este proceso, el capital humano constituye el factor determinante, dada la trascendencia, no solo en el plano técnico sino también político, de las decisiones que en esta institución se adoptan. Existen carencias para el cumplimiento efectivo de las atribuciones y obligaciones, no se gestionan las habilidades que son inherentes al cargo, se desconocen las capacidades que necesitan los cuadros y reservas, entes activos en el proceso de cambio para desarrollar las capacidades a nivel organizacional e individual, que se traducen en un mejor desempeño, siendo esta la situación problemática de la presente investigación, de la situación anteriormente descrita se deriva el Problema Científico:

¿Qué competencias genéricas y específicas necesitan los cuadros y reservas de la Fiscalía Provincial de Villa Clara para lograr un mejor desempeño?

Por tal razón, se realiza la presente investigación con el siguiente objetivo general: Diseñar un procedimiento que permita determinar las competencias genéricas y específicas de cuadros y reservas de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, que contribuya a mejorar el desempeño a nivel organizacional e individual.

El trabajo se estructura en tres capítulos:

Capítulo 1: Marco teórico de la investigación. En él se presentarán los conceptos teóricos básicos para el desarrollo del trabajo, basados en la investigación del estado del conocimiento científico alcanzado acerca del tema hasta el momento.

Capítulo 2: Caracterización de la entidad objeto de estudio. Donde se realizará la caracterización del objeto de estudio, se realizará un diagnóstico sobre el estado actual de la gestión del capital humano y los principales resultados, a partir de la utilización de diferentes métodos y herramientas.

Capítulo 3: Se describirá el procedimiento propuesto y se procederá a la validación del mismo por el método de expertos.

Por último, se emiten una serie de conclusiones y recomendaciones que finalizan el informe.

Conclusiones

1. La Gestión por Competencias constituye una fase superior en el trabajo de las organizaciones y las distintas definiciones de competencia estudiadas encauzan la acción de los individuos hacia el cumplimiento de las metas y alcanzar el éxito y la excelencia de la organización.

2. En el diagnóstico realizado se comprueba la necesidad de una tecnología que permita la aplicación efectiva de la gestión por competencia a partir de las NC ISO 10018, debido a la carencia de este instrumental teórico y metodológico en la organización de objeto de estudio práctico.

3. El procedimiento desarrollado en la investigación conforma una estructura coherente, desde el punto de vista teórico-metodológico, concebido para dar solución al problema científico planteado, a la vez que constituye la base de una tecnología para el desarrollo integrado de competencias en la Fiscalía Provincial de Villa Clara.

4. El criterio de los expertos evidenció que el procedimiento es factible para su aplicación en la organización objeto de estudio y demostró su factibilidad y utilidad práctica como herramienta de gestión de los recursos humanos.

Recomendaciones Bibliografía (selección)

1. Mantener un seguimiento sobre los resultados de la aplicación de la metodología y un monitoreo, a partir de la evaluación de los cuadros y sus reservas de la organización.

2. Divulgar los resultados obtenidos en la investigación y en el resto de las unidades que integran el sistema de la Fiscalía General de la República, lo cual contribuirá con la generalización de dichos resultados.

3. Proponer generalizar el procedimiento diseñado realizando las adecuaciones que correspondan.

Agüero, P. Z. 2001. *¿Cómo seleccionar al personal por competencias?* La Habana, Cuba.

Alles, M. 2008. *Diccionario competencias*.

Barreto Medina, D. E. R., Alexei. 2004. *Tecnología para la Gestión de los Recursos Humanos en base a Competencias en la Villa El Bosque de la Cadena Islazul*. Trabajo de Diploma presentado para optar por el título de Ingeniero Industrial, Universidad de Holguín.

Cuenca Miranda, J. I. 2005. *Tecnología Integral para la Gestión de los Recursos Humanos en base a Competencias en la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Holguín, Raudal*. Trabajo de Diploma presentado para optar por el título de Ingeniero Industrial, Universidad de Holguín.

Cuesta Santos, A. 1999. *Tecnología de Gestión de Recursos Humanos*. La Habana, Cuba.

Cuesta Santos, A. 2001. *Gestión de Competencias*. La Habana, Cuba.

Resolución No. 55 de 1996, del Consejo Federal de Cultura y Educación de Argentina. Argentina.

BASES GENERALES DEL DERECHO AGRARIO. UN DESAFÍO PARA LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN CUBANA

La ordenación de las bases generales de las diferentes ramas legislativas en la Constitución constituye un presupuesto indispensable para asegurar su desarrollo normativo, jurisdiccional y didáctico, y en consecuencia, ello deviene en una garantía del principio de seguridad jurídica.

La incompleta regulación de las bases generales del Derecho Agrario, en la Constitución cubana, pudiera estar asociada a las actuales incongruencias entre la legislación especial agraria y los fundamentos económicos, políticos y sociales previstos en nuestra Ley Suprema, lo cual pudiera ser causa de la insuficiente fundamentación de las resoluciones administrativas y sentencias de los tribunales en materia agraria y también sería uno de los factores que generan desprotección a los derechos fundamentales de las personas del campo.

MSc. YUDISBEL GUEVARA FLORES.

FISCAL JEFE MUNICIPAL CONTRAMAESTRE

FISCALÍA PROVINCIAL SANTIAGO DE CUBA



En Cuba, los actuales problemas y proyecciones en cuanto al futuro de la economía, especialmente de la agricultura, deben conducir hacia una actividad agraria comprometida con el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, cuestiones que se han convertido en nuestros días en asunto de seguridad nacional, teniendo en cuenta el declive de la producción agropecuaria, el aumento de las importaciones de alimentos y la dependencia del país de las mismas, así como los déficits en el desarrollo rural, aspectos que deberían quedar claramente definidos y jerarquizados, como parte de las bases generales del Derecho Agrario, en pos de lograr los anteriores propósitos.

Son innegables los éxitos logrados por la Revolución cubana desde su triunfo, el 1.º de enero de 1959, como lo constituye la implementación de programas encaminados al desarrollo rural y el avance productivo del sector agropecuario, sirva como ejemplo el Programa para el desarrollo de las regiones montañosas del país, llamado “Plan Turquino”, concebido en 1987, sin embargo, existen problemas como los anteriormente mencionados, que requieren de soluciones a corto y mediano plazo, que se proyecten en el plano jurídico.

La actualización del modelo económico de un país, impone cambios en todas las esferas de la sociedad, que tienen que reflejarse en las leyes para que estas logren eficacia, pero en el afán de lograr el equilibrio entre la realidad y las leyes, no puede olvidarse el papel primordial que dentro del ordenamiento jurídico cumple la Constitución como Ley Suprema.

El proceso de actualización del modelo económico y social cubano, convocado a partir de la aprobación en el 2011 de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, se ha planteado sobre la base del respeto al carácter socialista de la Revolución, consagrado como irrevocable en la Constitución, de ahí que todos los esfuerzos desde cualquier arista deben

estar dirigidos a dar respaldo a ese presupuesto.

Este proceso implica diversas transformaciones, que deben trascender a la Constitución, por ello, resulta frecuente por nuestros días escuchar términos como reforma, modificación, cambio y así debe ser para garantizar el desarrollo de un sistema socioeconómico que dé respuesta a las necesidades de nuestro pueblo.

Evidente resulta que para poder planificar el manejo y uso adecuado de la tierra, sus recursos y el desarrollo rural sostenible, se hace necesario dotar a esta tarea del respaldo constitucional adecuado, que garantice la consecución de los fines del Derecho Agrario, pues es una forma de regular los derechos, el acceso y el control de la tierra para el beneficio mutuo, tanto de los que la trabajan como de toda la población, el papel del Estado en el fomento de la actividad agropecuaria, y su influencia decisiva en los problemas de inseguridad alimentaria y del desarrollo rural sostenible.

Siendo preciso, además, atemperar el estado de la normativa constitucional cubana, tanto a las exigencias del principio de seguridad jurídica, como a algunos de los logros científicos más consolidados en la esfera del Derecho Agrario a escala internacional, particularmente en cuanto al desarrollo y asimilación por el Derecho Constitucional, de los principios generales y teleológicos del Derecho Agrario, y otros aspectos como el papel del Estado en el desarrollo rural sostenible, no solo para el logro de la unidad sistemática del ordenamiento jurídico agrario, sino también de la correspondencia entre las normas jurídicas agrarias y las necesidades de los sujetos de las relaciones jurídicas agrarias en la actualidad, y de la sociedad en general.

En el plano jurídico actual, la dirección del país ha emitido un llamado hacia la necesidad de evitar la concentración y el uso inadecuado o egoísta de la propiedad privada que se genera, con la explotación del hombre por el hombre, de espaldas a los intereses sociales, sin que ello provoque la anulación de la propiedad privada necesaria para la realización del individuo en la sociedad, de ese espacio vital para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la población.

La etapa de transformaciones en la vida económica que atraviesa nuestro país, en varios sentidos, se caracteriza por el contrastante desarrollo económico en cada una de las regiones, apreciándose, además, cierto distanciamiento entre el sistema de relaciones agrarias y lo previsto en la Constitución cubana al respecto, si tenemos en cuenta que la última reforma data de 2002, y que muchos aspectos del régimen económico han permanecido legalmente intactos desde 1992.

Por otra parte, la ciencia del Derecho Agrario a nivel internacional también ha tenido evoluciones importantes, por ejemplo, en lo referente a sus fines y principios, en lo que ha incidido la adopción de varios tratados internacionales, lo que trasciende

hacia el contenido fundamental de sus instituciones como la propiedad sobre la tierra y demás bienes agropecuarios. En consecuencia, también se ha producido un crecimiento ostensible de la regulación de las bases fundamentales del Derecho Agrario por parte de las Constituciones latinoamericanas más recientes.

La preservación de los principios, tanto generales como teleológicos¹ del Derecho Agrario, las formas de propiedad de la tierra, las cooperativas vistas como formas de gestión, y el apoyo del Estado al sector agrario son bases esenciales del Derecho Agrario, que merecen respaldo Constitucional, lo cual contribuiría necesariamente al desarrollo económico y social en el campo cubano.

En la búsqueda de la bibliografía referente a este tema, se apreció que existen algunas fuentes que a nivel internacional tratan el tema del Derecho Constitucional Agrario que incluye los principios, los fines y la actividad agropecuaria; siendo evidente que, en Cuba, ha sido insuficiente el debate académico sobre cuáles reformas constitucionales serían necesarias en cuanto a los fundamentos constitucionales del Derecho Agrario, sin que se encontraran tesis que aborden el tema de las bases generales de manera integral, sin embargo, algunos autores ya se han proyectado por la regulación constitucional de algunas de las bases esenciales del Derecho Agrario².

El objeto de la presente investigación lo constituyen las bases generales del Derecho Agrario en la Constitución, y el campo de la investigación consiste en la regulación de las bases generales del Derecho Agrario en la actual Constitución cubana y sus perspectivas de modificación.

Teniendo en cuenta estas consideraciones se ha planteado como Problema Científico: ¿Cuáles son las deficiencias

que presenta la regulación de las bases generales del Derecho Agrario en la Constitución de la República de Cuba que afectan el respaldo jurídico a la seguridad alimentaria, la promoción del desarrollo rural sostenible y otros fines del Derecho Agrario?

La estructura del trabajo se integra por tres capítulos que avanzan desde los aspectos doctrinales a cuestiones históricas y normativas, a los efectos de contrastar la legislación constitucional y aprovechar la experiencia alcanzada en otros países de Hispanoamérica, hasta llegar a la evaluación de la propia experiencia nacional y de sus problemas normativos actuales, con vistas a arribar a una propuesta de cambio.

En el primero se reflejan aspectos doctrinales relacionados con el Derecho Constitucional y la Constitución, su esencia y funciones, desarrollando, posteriormente, todo lo referido al Derecho Agrario y sus bases generales. En el segundo capítulo, luego de la previa selección de criterios de comparación, se examinaron las Constituciones de varios países de Hispanoamérica, con relación al reconocimiento constitucional de las bases generales del Derecho Agrario, que conforman nuestro tema de investigación. En el Capítulo III, luego de caracterizar la regulación constitucional de las bases generales del Derecho Agrario en Cuba, se identifican las deficiencias persistentes y se formulan propuestas que sirvan de fundamento para la modificación constitucional a este respecto.

Este estudio supone un aporte al enriquecimiento de la doctrina del Derecho Constitucional Agrario, por cuanto sistematiza una fundamentación teórica de los principios generales y teleológicos del Derecho Agrario y presupone un diagnóstico sobre el tratamiento constitucional, en Cuba, a las bases generales del Derecho Agrario, con especial mención a experiencias en el Derecho Comparado, aportando como resultado fundamental, una propuesta de bases generales del Derecho Agrario que puedan servir para la próxima modificación constitucional a ese respecto.

Conclusiones

PRIMERA: La alta relevancia de la seguridad alimentaria, el desarrollo rural sostenible y la complejidad de la actividad agropecuaria exige, no solo de una rama jurídica especial, sino de que se encuentren reguladas en la Constitución las bases generales del Derecho Agrario, constituyendo ello una necesidad para garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de los fines de esta rama, siendo apreciable que importantes autores del

1. Cuando hablamos de principios generales del Derecho Agrario nos estamos refiriendo a los principios de carácter instrumental, que son los que hacen posible el logro de los principios teleológicos, ambos tienen una relación recíproca o circular.

2. En tal sentido, podemos señalar la investigación del Dr. Rolando Pavó Acosta: "La codificación del Derecho Agrario cubano en el nuevo milenio: un debate necesario" y la tesis "El Derecho Agrario Cubano; proposiciones para una reconstrucción sistémica", asimismo la obra de Avelino Fernández Peiso: "El fenómeno cooperativo y el modelo jurídico nacional. Propuesta para la nueva base jurídica del cooperativismo en Cuba" o el aporte de Maritza Mc Cormack con su obra "Consideraciones sobre el Derecho Agrario".

Derecho Agrario se han pronunciado por la necesidad de la regulación de este derecho en la Constitución, aunque no se ha elaborado una sistemática donde aparezcan todas identificadas.

SEGUNDA: En el estudio comparado de las Constituciones de Hispanoamérica se aprecia, como tendencia, la inclusión de la seguridad alimentaria como uno de los fines del Derecho Agrario, el desarrollo rural sostenible, el uso racional de los recursos naturales, el reconocimiento de la función social de la propiedad, la jurisdicción especial agraria, el régimen de herencia de la tierra, siendo una regularidad el reconocimiento del papel del Estado en el cumplimiento de los fines del Derecho Agrario.

TERCERA: El orden constitucional cubano ofrece una regulación incompleta de las bases generales del Derecho Agrario, toda vez que no regula todos los principios generales y teleológicos de esta rama legislativa, no da una clara definición de la actividad agraria, ni del papel del Estado en la utilización de incentivos para el desarrollo de esta actividad, entre otros aspectos importantes del Derecho Agrario, que no deben dejarse en manos del legislador ordinario.

CUARTA: A partir de las peculiaridades y relevancia de los fines del Derecho Agrario, se puede arribar a la necesidad de que en la Constitución aparezcan las bases generales del Derecho Agrario, haciendo énfasis en sus principios generales y teleológicos, la noción de actividad agraria y otras instituciones que forman parte de su contenido, como las formas de propiedad, la existencia de la jurisdicción agraria, la regulación integral del régimen de herencia testada e intestada de la tierra y demás bienes agropecuarios, así como el papel del Estado en la realización de los principios teleológicos del Derecho Agrario.

Recomendaciones

En materia de Derecho Agrario en Cuba, el tema de su regulación en la Constitución es uno de los más polémicos, por lo que lejos de considerar nuestra investigación terminada, recomendamos:

A la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular:

1. Que la Constitución de la República de Cuba sea modificada según las bases generales del Derecho Agrario que aquí se proponen, es decir, que se regulen dentro del acápite contentivo de los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado las siguientes:

- Principios que rigen el régimen agrario y campesino.
- De las formas de propiedad
- Papel del Estado en el fomento del desarrollo rural sostenible
- Régimen de herencia de la tierra
- Jurisdicción agraria

Bibliografía (selección)

- Castro Ruz, Fidel. 1973. *La Historia me Absolverá*. Constitución de Cuba de 1901.
- Constitución de la República de Cuba.
- Constitución de España. 27 de diciembre de 1978, modificaciones por reforma el 27 de agosto de 1992.
- FAO. 1976. *Derecho Agrario y Desarrollo Agrícola. Estado actual y Perspectivas en América Latina. Informe final del Grupo Regional de Asesores en Derecho Agrario*. Roma, Italia.
- Fernández Peiso, Avelino. 2005. *El fenómeno cooperativo y el modelo jurídico nacional. Propuesta para la nueva base jurídica del cooperativismo en Cuba*. Tesis Doctoral.
- Ferrero Rebagliati, Raúl. S/A. *Ciencia Política –Teoría del Estado y Derecho Constitucional*.
- Pavó Acosta, Rolando. S/A. *La codificación del Derecho Agrario cubano en el nuevo milenio: un debate necesario*.
- Quiroga Lavie, Humberto. 1987. *Derecho Constitucional*. Buenos Aires, Argentina.
- Zeledón Zeledón, Ricardo. S/A. *Los desafíos del Derecho Agrario*. Conferencia dictada en el VI Congreso Mundial de Derecho Agrario. Revista *Direito Agrario*. Número 16 Año 17. Brasilia, Brasil.
- Zeledón Zeledón, Ricardo. S/A. *El principio de la responsabilidad ambiental en el Derecho Agrario*. Revista Argentina de Derecho Agrario y Comparado. Cultura y Educación de Argentina. Argentina.

PONENCIAS

LA PRUEBA INDICIARIA Y SU EMPLEO EN LA DEMOSTRACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS



AUTOR: ESP. DIMAS ALFREDO HERRERA GANDOL

FISCAL ASISTENTE DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

INTRODUCCIÓN

Los conceptos de prueba, fuentes, medios y actos de prueba tienen una vinculación sustantiva de contenido a continente y una indisoluble relación procesal, considerándose como prueba, en sentido estricto, los elementos provenientes de una fuente y que, a través de los medios y actos procesales, procuran la demostración de que un hecho ha existido, y que ha existido de un modo y no de otro, para lograr el convencimiento del juzgador sobre las alegaciones fácticas y jurídicas de las partes.

Fuente de prueba puede ser toda persona, cosa, lugar o hecho en que pueda encontrarse o del que pueda inferirse el conocimiento de algo, con vistas a sustentar una tesis, una proposición o un juicio de valor. En este sentido, podrán ser fuentes o medios de prueba los testigos, peritos o acusados (pruebas personales), un objeto o documento, entendidos como cualquier soporte capaz de contener información (pruebas reales), así como esas mismas fuentes o medios, o cual-

quier cosa, hecho o lugar, que, de forma indirecta, conjunta o fragmentaria, aporten elementos para sustentar esa tesis, esa proposición o ese juicio de valor, caso en el cual estaríamos ante la denominada prueba indiciaria.

Este tipo de prueba, consistente en la interpretación de hechos y circunstancias que pueden conducir al descubrimiento de la verdad material, no ha tenido en su historia una definición precisa. Los civilistas se refieren a presunciones, los criminalistas a indicios y los juristas ingleses y norteamericanos a circunstancias, de donde proviene el nombre de prueba presuntiva, indiciaria o circunstancial, cuyas diferencias se limitan a la existencia de distintos puntos de vistas sobre un mismo objeto.

Aunque, a nuestro juicio, la utilización de los indicios para la investigación y el empleo de la prueba indiciaria para la demostración tienen momentos y connotaciones jurídicas distintas, tanto desde el punto de vista procesal como sustantivo,

es innegable que la historia de la investigación criminal ha sido también la historia de la prueba indiciaria, referida a los elementos o circunstancias vinculadas al hecho investigado, que permiten inferir su existencia y la responsabilidad del autor.

ALGUNAS VALORACIONES Y CONCEPTOS SOBRE LA PRUEBA INDICIARIA

Para un sector doctrinal, la prueba indiciaria tiene carácter secundario o supletorio, otorgándoles un valor relativo o complementario de las demás, sobrevalorándose así la importancia de las pruebas directas (personales y reales), sin comprender que muchas veces estas solo tienen utilidad como pruebas indiciarias, las que la posición dominante ubica en un mismo plano, en consideración al nexo tan estrecho que se requiere entre los supuestos conocidos y el hecho que quiere demostrarse.

H.J. Stegen, un autor del siglo XIX, la caracterizó refiriendo “que, si se quiere colgar a alguien, sería fácil hallar la soga en la prueba indiciaria” (En Döhring. 1987: 313). “El policía –decía el criminalista francés Edmond Locard–reconstruye la identidad el culpable por los rastros, como el paleontólogo reconstruye el fósil por sus restos” (En Gorphe. 1950: 108). “Un solo vestigio entre el polvo puede constituir la clave del problema criminal” (Ibídem: 67).

El austriaco Hanns Gross, padre de la criminalística, el primero en utilizar los logros científicos para la investigación criminal, en su Manual del Juez de Instrucción del año 1893, recomendaba a los jueces de instrucción:

“que consideraran cualquier asunto como un conjunto sistemático y que se dieran cuenta de que, en el desenvolvimiento natural de las cosas, nada sucede que carezca de explicación, que sea aislado, incoherente; sino que cuanto procede del hombre es como un organismo vivo, donde todo posee una razón de ser.

Las acciones humanas son sus frutos: Se relacionan con el individuo como cada hoja se enlaza con el árbol del cual brota; emanan del individuo tan naturalmente y con tanta seguridad como sale el fruto de la planta que acostumbra a producirlo” (Ibídem: 33).

Carnelutti consideró indicio “aquel cuya función probatoria es meramente accidental y surge por la eventualidad de una relación cuya indefendible a priori con el hecho que se va a probar” (En Cordón. 2011: 28); Manzini lo vio como “La circunstancia de la que puede extraerse una conclusión en relación con la existencia o inexistencia de un hecho a probar” (Ibídem: 31), y Dellepiane lo entendió “como todo rastro, vestigio, huellas, circunstancias y en general todo hecho conocido o debidamente comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al conocimiento de otro desconocido” (Ibídem: 35).

Aun cuando la verdad sea una y tenga siempre el mismo valor, los métodos para llegar a ella son varios y desiguales en términos de eficiencia, pues lo conocido indirectamente requiere ser evaluado en forma comparativa con otras apreciaciones y de manera más severa que aquello que puede ser apreciado directamente. La prueba indiciaria resulta sumamente útil en los casos donde la prueba directa es poco probable o donde estas solo alcancen el rango de pruebas indiciarias.

Pudiendo entenderse entonces por prueba indiciaria, conocida también como indirecta, por la inferencia que induce del hecho conocido al hecho sometido a prueba, como aquellos elementos o circunstancias que, constituyéndose en partes integrantes de un todo, nos permiten deducir la ocurrencia de un hecho criminal y la consecuente responsabilidad de su autor, posibilitando unir ambos aspectos con su demostración y transitar el complejo

camino que nos aproxima a la verdad material.

REQUISITOS PARA LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA

Los indicios o pruebas indiciarias, según sean de utilidad para la investigación no para la demostración, en función de una regla general para su apreciación, deben cumplir, a nuestro juicio, los requisitos de:

A) Tener un sustento fáctico: Si este medio de prueba presenta la desventaja de ser indirecta, a veces compleja y esencialmente fragmentaria, tiene a favor su objetividad, pues para que la prueba indiciaria sea jurídicamente relevante y pueda destruir la presunción de inocencia, debe sustentarse en hechos debidamente acreditados, porque la intuición no puede llenar las lagunas de la demostración.

Entre los elementos fácticos posibles pudieran incluirse, en cuanto al autor, la capacidad de ejecutar el delito, la oportunidad de cometerlo, el móvil de la acción, su comportamiento y manifestaciones, así como las evidencias materiales respecto al hecho imputado, resultando de mucha utilidad en este ámbito los hechos generalmente conocidos, los notorios o evidentes y las verdades científicas.

B) Estar basados en las reglas de la experiencia: La experiencia es la sucesión de percepciones empíricas revertidas en fuente del conocimiento, con origen en la práctica y la experiencia social, transmitiéndose de generación en generación, infiriendo sus reglas la subordinación del discernimiento al principio objetivo de actuación, reconociéndoseles capacidad probatoria en el proceso penal por entenderse fruto del conocimiento reiterado y presentar cierta estabilidad y permanencia.

Las reglas de la experiencia ofrecen pautas, formas o parámetros de comportamiento de determinados fenómenos de la

realidad material, las causas que los determinan y las consecuencias que se derivan habitualmente, permitiéndonos comprender las relaciones de causa a efecto que se producen. Parten de vivencias iguales o similares que se sintetizan en conocimientos y sirven para sacar deducciones sobre el caso en estudio, aun no esclarecido, reposando su fuerza de convicción en la expectativa de que observaciones coincidentes hechas, en situaciones similares, serán avaladas por los hechos.

C) Sustentarse en las leyes de la lógica:

Las leyes de la lógica nos permiten encadenar un razonamiento donde se expongan las condiciones bajo las cuales las afirmaciones son verdaderas. La lógica analiza la estructura y el valor de verdad de las proposiciones y su clasificación, permitiendo establecer una adecuada relación entre la premisa y la conclusión, de tal forma, que si la primera es verdadera la segunda también lo será. En cierto sentido, las premisas de una proposición válida contienen la conclusión, y la verdad de la conclusión se deriva de la verdad de las premisas.

En este sentido, cobran importancia las leyes, reglas o principios de la lógica, como proposiciones universales que rigen el conocimiento y el fundamento de la verdad, como las leyes de identidad, no contradicción y tercero excluido, reveladas por Aristóteles, y de la razón suficiente, formulada por Leibniz. La Ley de Identidad expone que en el proceso de raciocinio no puede cambiarse una idea por otra o un concepto por otro, ni pasar ideas idénticas por distintas o distintas por idénticas; la Ley de No Contradicción señala que dos juicios opuestos sobre un mismo objeto, en un mismo tiempo y en una misma relación, no pueden ser verdaderos simultáneamente; la Ley del Tercero Excluido establece que de dos juicios opuestos uno es verdadero y el otro falso, siendo imposible un tercero; y la Ley de Razón Suficiente refiere que todo tiene explicación suficiente de porqué esa sí y no de

otra manera, nada acontece sin razón.

Estas leyes se usan en operaciones con conceptos y juicios, en los razonamientos, demostraciones y refutaciones, reflejando en la conciencia humana las relaciones entre los objetos del mundo objetivo o propiedades habituales de objetos como su relativa estabilidad, certeza, incompatibilidad y ausencia simultánea de indicios, como principios del raciocinio correcto en la demostración de juicios y teorías verdaderas y refutación de juicios e hipótesis falsas, proyectando lo real en lo subjetivo del hombre, conduciendo su violación a errores lógicos impremeditados (paralogismos) o conscientes (sofismas).

D) Ser múltiples o con singular potencia acreditativa: Una mayor cantidad de indicios permite un análisis más objetivo respecto a la ocurrencia del evento criminal, de la responsabilidad del autor y de sus circunstancias, elevando la posibilidad de convicción y certeza en la decisión, pues un solo indicio podría fácilmente inducir a error, pudiendo una pluralidad concordante resultar concluyente, lo que no niega la posibilidad de que, excepcionalmente, un solo indicio, por su singular potencia acreditativa, pueda formar convicción, porque vale tanto la cantidad como la calidad.

E) Ser próximos entre sí y con el hecho a probar: La proximidad y estrecha vinculación entre los indicios, es un elemento que facilita su explicación, mayor entendimiento y la posibilidad de ofrecer una conclusión demostrativa, porque su propia naturaleza periférica exige que estén interrelacionados entre sí y con el hecho a probar, pues la fuerza de convicción de esta prueba procede tanto de la adición o suma, como de la imbricación.

La interrelación exige que los indicios se articulen recíprocamente, de forma precisa, coherente y complementaria, sin excluirse o contraponerse, incidiendo en la racionalidad del nexo entre el hecho conocido y el sometido a prueba, pues solo de

indicios razonablemente enlazados, como elementos de una misma construcción, es posible inferir conclusiones fundadas, de las que el juez obtenga el grado de convicción necesario para decidir.

F) Ser convergentes o concordantes: Convergencia es la acción de dirigir algo hacia un mismo punto. Los indicios deben estar estrechamente identificados, por lo que cada elemento o circunstancia ha de tener o debe indicar un solo o idéntico sentido, razón por la cual, cuando apuntan hacia una misma dirección, señalando o coincidiendo en una misma posibilidad de ocurrencia de un evento delictivo o en cuanto a la responsabilidad del autor, refuerzan su eficacia probatoria.

Los indicios deben ser unívocos, favoreciendo mucho para arribar a conclusiones seguras, la existencia de señales probatorias concordantes, de orígenes diversos e independientes entre sí, que converjan en un mismo punto con enfoque singular. Los indicios aislados son contingentes porque solo aportan sospechas, en tanto los concordantes valen como necesarios, proporcionando una prueba sólida.

G) Ser esenciales y relevantes: La cualidad de esenciales, indica que no deben ser tenidos en cuenta los indicios referidos a elementos accidentales o casuales, sino los que recaen sobre aspectos esenciales o principales del hecho y de la responsabilidad del autor, porque la fuerza probatoria de un indicio depende en su esencia, de la estrecha relación entre el hecho probado y el investigado. No todo indicio tiene relevancia a los efectos de la investigación, requiriéndose que sea periférico o concomitante al hecho cuya verificación se persigue, permitiendo inferir el enlace entre uno y otro, sin ser un simple nexo circunstancial o temporal, sino una relación material y directa con el hecho criminal y su agente.

H) No ser antagónicos, ni anfibológicos: Un indicio solo revelará con mayor precisión un hecho determinado, cuando

menos le sea posible coincidir con otro diferente, porque cuando dos indicios se contradicen, hasta el punto de ser antagónicos, resultan inconsistentes para convertirse en pruebas indiciarias con eficacia probatoria, resultando de gran importancia a esos fines la inexistencia de cualquier antagonismo indiciario.

Las señales probatorias anfibológicas o indicios que puedan prestarse a más de una interpretación y emplearse, tanto en un sentido como en el opuesto, ofrecen dificultades para ser empleados en la actividad probatoria, en tanto los contraindicios constituyen coartadas introducidas para desvirtuar los indicios que sustentan la imputación, disminuyendo su capacidad y eficacia probatoria al generar márgenes de dudas que imposibilitan destruir la presunción de inocencia.

I) El establecimiento de una conexión estructural para su exposición y apreciación: El umbral de la certeza precisa que los hechos sean ciertos, que exista una relación causal entre los indicios y la teoría que se pretende demostrar, y que las demás interpretaciones no merezcan igual grado de aceptación, lo que requiere de una conexión estructural para su exposición y apreciación, porque la esencia de esta prueba reside en la inferencia o juicio lógico, mediante el cual se puede concluir la existencia del hecho a probar, lo que presupone un razonamiento discursivo, que partiendo de indicios probados, le permite al juez alcanzar convicción sobre la existencia del hecho necesitado de prueba.

El objetivo principal del montaje estructural de esos tres elementos, no es el hecho del cual se parte, sino el proceso mental que se conexiona a ese hecho y en virtud del cual se deduce la existencia de una circunstancia fáctica jurídicamente relevante, adquiriendo notoriedad para la investigación el hecho que da forma a una prueba indiciaria con aptitud suficiente para destruir la presunción de inocencia.

El artículo No. 353 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo,

Laboral y Económico, dice “Para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medios de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio racional”. De lo que se infiere, que la estructura que se diseñe para la exposición y apreciación de la prueba indiciaria, debe concebir al hecho conocido o indicante como punto de partida de toda inferencia indiciaria, de tal forma, que a partir del mismo, pueda deducirse, a través de una relación de causa a efecto entre el hecho indicante y el hecho indicado, tanto la existencia del hecho delictivo mismo, como la responsabilidad de su autor.

EMPLEO DE LA PRUEBA INDICIARIA EN LA DEMOSTRACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

No en todos los hechos delictivos es siempre posible la obtención de pruebas directas (reales o personales), siendo necesario, en algunas investigaciones, acudir a la prueba indirecta o indiciaria. Tal es el caso de la demostración del delito de Lavado de Activos.

La expresión más importante del crimen organizado es el narcotráfico y la más compleja es el lavado de activos, pues si aquel requiere de una organización empresarial, este demanda de una capacidad empresarial con alta eficiencia y conocimiento de los mercados financieros y bursátiles, existiendo tres elementos importantes a tener en cuenta en la investigación: la conducta dirigida a disimular el origen ilícito de los productos de naturaleza criminal, el delito previo y el elemento intencional.

La demostración de cualquiera de esos aspectos enfrenta obstáculos como la apariencia de legalidad, el mecanismo de ingeniería financiera aplicado en el lavado de activos, su carácter clandestino y estructurado, la capacidad de camuflaje, el aprovechamiento de paraísos fiscales, el

uso de personas jurídicas para encubrir la titularidad real y el control de los activos de procedencia ilegal, el uso de profesionales como asistentes y consejeros, las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, sus implicaciones internacionales, la dificultad en ser apreciado por el profano y aun por los expertos, así como el temor que en muchos casos infunde el crimen organizado, siendo difícil la obtención de pruebas directas, resultando necesario el empleo de la prueba indiciaria para evitar la impunidad.

En ese sentido, se pronuncia el Tribunal Supremo Español (TSE) en la sentencia No. 1637 del 10 de enero de 2000, consignando, “La prueba directa prácticamente será de imposible existencia dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas, así como de lavado del dinero procedente de aquella, por lo que, en delitos de blanqueo, lo usual será contar solo con pruebas indiciarias...” (Código Penal de España 2004: 888).

LA PRUEBA INDICIARIA EN CUANTO A LA CONDUCTA DIRIGIDA A DISIMULAR EL ORIGEN ILÍCITO DE LOS PRODUCTOS DE NATURALEZA CRIMINAL

Según la realidad cubana, el derecho comparado y nuestras experiencias en el caso de un empresario extranjero procesado y juzgado por un delito de Lavado de Dinero en Cuba (Caso Mariposa), y otros casos investigados recientemente, las pruebas indiciarias más importantes pudieran ser las siguientes:

A) Incremento patrimonial injustificado: Sin ser concluyente respecto al delito que lo posibilita, es un elemento importante a tener en cuenta, pues constituye la evidencia de que una persona ha incrementado su patrimonio (elemento de hecho), sin existir la causa que debiera justificarlo (elemento de derecho), así como una relación de causa a efecto entre

el aumento del patrimonio y la ausencia de justificación; pudiendo manifestarse en la realización de inversiones, la adquisición de sociedades mercantiles, inmuebles, embarcaciones, autos, obras de arte, dinero y otros bienes, con expresión de un alto nivel de vida caracterizado por elevados gastos, contrastante con que las inversiones realizadas o las sociedades mercantiles han permanecido inactivas o con pérdidas o sus resultados contables no son suficientes para justificar ese incremento.

B) Manejo de grandes cantidades de dinero que por la dinámica de las transacciones ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias: Se trata de movimientos injustificados de dinero entre distintas cuentas o cuentas de varias sociedades, utilizadas como puente (técnica de mareo) o como caja financiera, con diversas justificaciones (transferencias de fondos, operaciones financieras, simulación de préstamos o auto préstamos con intereses, créditos, reembolsos, asesorías y otras), con aplicación de la tecnología e ingeniería financiera, de forma incongruente con las actividades mercantiles o financieras a que presuntamente se dedica el lavador de activos.

C) Adquisición, constitución y operación de sociedades en paraísos fiscales, en muchos casos instrumentales sin actividad real: Al reunir los paraísos fiscales condiciones ideales para el blanqueo de capitales, por estar ausente o ser casi nula la imposición sobre ingresos y beneficios de cualquier origen; tener incitaciones fiscales para sociedades no residentes; ausencia de control de cambio; riguroso secreto bancario y facilidad para la creación y uso de sociedades pantallas o de bolsillo, son utilizados en estas actividades por los lavadores de activos y el crimen organizado, siendo un ejemplo notorio el caso de Islas Seychelles, que en 1995 adoptó la inmunidad para inversionistas extranjeros contra toda persecución criminal y una protección total contra toda medida de embargo de sus bienes, a menos

que los actos de violencia o el tráfico de drogas se cometan en el territorio nacional.

D) Adquisición de sociedades con dificultades económicas o con bajo o ningún nivel de operaciones mercantiles: El lavador de activos adquiere sociedades tradicionales y conocidas que atraviesan dificultades económicas, obteniendo a bajo precio una sociedad constituida, con cuentas bancarias aperturadas, evitando las sospechas que pueden generar los presuntos altos volúmenes de operaciones o los beneficios de una empresa recientemente constituida.

E) Adquisición, apertura y operación de gran cantidad de cuentas bancarias en el territorio nacional y el extranjero para facilitar la recepción y movimiento de dinero: Se fundamenta en la necesidad de hacer frecuentes transacciones financieras (técnica de mareo) y aplicar la ingeniería financiera para disimular el origen ilegal de los activos y dificultar cualquier análisis sobre ello.

F) Adquisición y especulación con bienes improductivos: Tiene su expresión en la compraventa de obras de arte, inmuebles, acciones y cualquier otro activo idóneo para la especulación, pues el lavador de activos trata de dar apariencia legal a su riqueza con las ganancias obtenidas en la comercialización o tráfico de bienes, cuyo valor subjetivo permita movilizar grandes recursos discretamente, presentando una venta simulada del bien, supuestos valores obtenidos por su venta o la venta por valor mayor al de adquisición, para tratar de justificar presuntas ganancias y el incremento de su patrimonio.

G) Enmascaramiento de la verdadera condición respecto a las sociedades mercantiles y activos: Se consigna en los documentos de creación de las sociedades a personas que solo prestan su identidad para el acto constitucional y en los procesos de adquisición le proponen a los antiguos propietarios no reflejar el cambio de accionistas y que sigan apareciendo como titulares de

la empresa, para aparentar que son otros los propietarios o administradores, lo que permite fragmentar y enmascarar el patrimonio y evadir los controles sobre la pertenencia y justificación del mismo.

H) Sociedades carentes de estructura que sustenten su presunta actividad mercantil: Se verifica en la constitución o adquisición de sociedades mercantiles aparentando la existencia de una actividad rentable para justificar los ingresos, tratándose de sociedades instrumentales o de bolsillo, con pocos o ningún empleado y sin establecimientos, por ello inexistentes como fuentes legales de ingresos.

I) Uso y traslado de dinero físico en grandes cantidades: Consiste en el transporte físico del efectivo obtenido en actividades ilícitas hacia un lugar donde sea posible introducirlo en el tráfico económico o financiero formal, para su legalización, evitando o burlando los controles aduaneros o bancarios al extraer o sacar las divisas de un país hacia otro. También se utiliza dinero en efectivo obtenido ilegalmente para la realización de transacciones que lo admitan en el propio país.

J) Diversidad de tipos de negocios: Por la falta de especialización real en el ámbito mercantil o financiero, el lavador busca invertir los activos resultantes de actividades ilícitas en cualquier actividad que le permita ocultar el origen delictivo de los mismos, incursionando en disímiles tipos de negocios.

K) Entramado de Sociedades: El sistema de compañías aparentes puede extenderse al infinito, pero un proceso más efectivo es crear un holding-pantalla dentro de un paraíso fiscal, con interacción de las sociedades que forman parte del entramado, permitiendo realizar actividades reales o aparentes en el ámbito financiero y mercantil, que justifiquen la obtención de supuestas utilidades, posibilitando el lavado de activos, dificultándose la determinación de los pro-

pietarios reales de cada sociedad y la participación individual de cada una de ellas en las transacciones que se originen.

L) Falsedades documentales: Existen diferentes modalidades, como falsas facturas de importación o exportación, amparando presuntas operaciones de comercio internacional y prestación de servicio en el exterior que pueden justificar la realización de transferencias o la movilización de mercancías, sin desplazamiento físico de fondos adquiridos en actividades ilícitas, así como en la identidad de los propietarios de sociedades, en la compraventa de inmuebles y en las declaraciones fiscales.

M) Existencia de vínculos o conexiones con el crimen organizado o con actividades, personas o grupos relacionados con los delitos determinantes: Las relaciones, y más exactamente el tipo de relaciones, con personas involucradas en delitos determinantes posibilita identificar y acreditar el origen de los bienes objeto del lavado de activos, lo que constituye un elemento imprescindible para la corporificación de la conducta típica.

N) Operaciones financieras y bursátiles reales o ficticias: Las operaciones de intermediación financiera en sentido general y la inversión en bolsas de valores, así como la compra de certificados de depósito a término; otorgamiento de líneas de crédito; inversión en bonos u otros títulos valores al portador y la compraventa de monedas extranjeras, entre otras, convierten en derechos, a favor del lavador de dinero los recursos provenientes de actividades delictivas.

El monitoreo de operaciones de compraventa internacional para adquirir las deudas de las empresas importadoras con los suministradores y obtener los derechos de crédito refrendados en títulos valores y la participación en operaciones de compensación de deudas, facilitan el movimiento de un gran volumen de dinero en efectivo, posibilitan ocultar el origen ilegal de recursos financieros invertidos y permiten dar una imagen

de legalidad a las ganancias obtenidas y al patrimonio de lavador de activos.

En el caso particular de Cuba, se aprecian, además, las amenazas de recepción de dinero resultante de fraudes y del tráfico de drogas y personas, remitidos por cubanos radicados en EE.UU. y otros países, para invertirlo en viviendas, autos y en el sector del trabajo por cuenta propia mediante testaferros; el envío de remesas por vías informales (sistema hawala); la extracción clandestina de dinero hacia el extranjero, para luego traerlo por vías oficiales o declarándolo en la Aduana, con vistas a darle un aparente origen legal, y el empleo de dinero resultante de actividades ilegales para pagar remesas del extranjero, recibiendo igual cantidad en el presunto lugar de origen de la remesa, lográndose los propósitos delictivos, sin asumir los costos y riesgos de las transferencias por cualquier vía.

LA PRUEBA INDICIARIA EN CUANTO AL DELITO PREVIO

El tipo subjetivo del delito de blanqueo de activos exige el conocimiento de la existencia de un delito determinante, conocimiento que abarcará lo que para un profano alcance a conocer y valorar como delictivo y que debe tenerse después de la comisión del delito determinante y antes de realizar la conducta blanqueadora. Según sentencias No. 1801 del 24 de abril de 1999, No. 859 del 14 de mayo de 2001 y No. 1915 del 11 de octubre de 2001 del TSE, “ese conocimiento por el sujeto activo de la comisión antecedente de tal delito no exige una noticia exacta, cabal y completa del mismo, sino un estado de certeza que significa un saber por encima de la simple sospecha o conjetura” (Código Penal de España. 2004: 877).

No se requiere que el Tribunal declare previamente un hecho como delito, pero si debe hacerse una interpretación valorativa del elemento normativo y concluir que los bienes a ocultar proceden de hechos susceptibles de ser calificados como delito determinante, lo que se probará a través de inferencias y presunciones judiciales. La

sentencia No. 1704 del 29 de septiembre de 2001 del TSE refirió: “Ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación, se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante requisito es, por lo demás, rigurosamente lógica desde una perspectiva de política criminal puesto que, tratándose de combatir eficazmente un tráfico de drogas en todos los tramos del circuito económico generado por dicha delincuencia, carecería de sentido esperar, en la persecución penal de estas conductas, a que se declaren la responsabilidad de quien en el tráfico hubiere participado” (Código Penal de España 2004: 887).

En ese sentido, la sentencia No. 158 de 2011, dictada en la Causa No. 122 del propio año, de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana (Caso Mariposa), refirió que “El dominio del agente comisario del lavado de capitales, sobre el hecho de que los activos que emplea poseen un origen espurio, es un suceso cognoscitivo, por tanto intangible o perceptible de forma explícita, lo que impone inexorablemente su racional deducción probatoria a través de inferencias y presunciones que efectúe el tribunal juzgador que conoce el caso concreto, sobre circunstancias fácticas objetivas reveladas a través de la práctica de pruebas. No se exige conocimiento preciso o exacto del delito previo, sino que, basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito” (Sentencia No. 158 de 2011: 85). Evidenciándose que no es preciso, para sancionar el lavado de activos, la condena previa del ilícito que dio origen a los bienes que le sirven de objeto material, elemento que determina, a plenitud, su carácter autónomo.

LA PRUEBA INDICIARIA EN CUANTO AL ELEMENTO INTENCIONAL

En cuanto al elemento subjetivo, basta la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la lógica inferencia de que

procede de un delito, siendo excesivo requerir un conocimiento exacto y preciso de la procedencia, lo que solo será posible cuando se integren organizaciones criminales con distribución de tareas. La Sentencia No. 1637 del 10 de enero de 2000 del TSE dice: “El único dolo exigible al autor y que debe objetivar la sala sentenciadora es precisamente la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito (cualquiera)” (Código Penal de España 2004: 888).

Las operaciones de blanqueo son irregulares comparadas con las prácticas mercantiles ordinarias, por lo que resulta difícil alegar que no albergó sospechas de que las actuaciones eran delictivas, sobre todo tratándose de quienes actúan profesionalmente en el tráfico económico. Para acreditar el dolo en este tipo penal, no se exige un conocimiento apodíctico del hecho delictivo del cual proceden los activos, bastando la existencia de un estado anímico de certeza sobre su origen delictivo, el que como todo hecho psicológico es de difícil demostración mediante prueba directa, debiendo inferirse de indicios, como la clandestinidad y otras irregularidades circunstanciales, habitualidad, precio desproporcionado respecto al valor real, inconsistencia o falta de justificación sobre las operaciones, la personalidad del lavador y relación del mismo con los autores del delito determinante, entre otros.

Una de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la 2.a), establece que “la intención y el conocimiento requeridos para probar el delito de lavado de activos, pueden inferirse a partir de circunstancias de hecho objetivas”. Ramón de la Cruz Ochoa considera suficiente el saber que las cosas provienen de un delito (dolo directo), saber el origen espurio de los activos. De la expresión “debido suponer racionalmente”, infiere la ignorancia intencional. Se estima que esta expresión pretende cubrir aquella hipótesis en que el autor del delito se coloca ante la posibilidad de verificar el origen de los bienes, pero con voluntad e intención prefiere no saberlo, ignorarlo, no verificarlo, no cumpliendo la obligación (de

la Cruz Ochoa. 2004: 80). Este elemento cognoscitivo es exigido específicamente en el artículo No. 346 del Código Penal al incluir, en relación con el origen delictivo de los bienes, los términos “con conocimiento”, “o debiendo conocer”, “o suponer racionalmente por la ocasión o circunstancias de la operación”, que proceden directa o indirectamente de actos relacionados con los delitos determinantes relacionados.

Conclusiones

La prueba indiciaria o indirecta, que vale más por su utilidad propia que supletoria, es la que permite demostrar, mediante el nexo lógico y causal entre el hecho probado y el que se trata de probar, la ocurrencia de un evento delictivo y la responsabilidad de su autor, como expresión del estrecho vínculo existente entre los hechos, su interpretación, la demostración y la convicción.

Considerada por algunos como un instrumento inferior e inseguro de averiguación de la verdad, requiere, al igual que las restantes pruebas, de mucho sentido crítico y del cumplimiento de los requisitos para su empleo y eficacia probatoria, tanto por sí, como de conjunto con las demás, pero su utilidad se impone en los nuevos escenarios de la actividad criminal.

Sin dejarnos engañar por la aparente confiabilidad de una argumentación, y sometiendo a un severo análisis los distintos fragmentos de la prueba indiciaria, puede alcanzarse con ella certeza plena respecto a un punto determinado del hecho o sujeto inculcado.

Bibliografía

Arburola Valverde, Allan. 1993. *La Prueba Indiciaria o Circunstancial en Materia Penal*. Costa Rica.

Código Penal de España. 2004. *Comentarios y Jurisprudencia*. 9na Edición. España: Editorial COLEX.

Condori Memani, Guiber. 2009. *La Prueba Indiciaria*. Lima, Perú. Versión Digital.

Cordón Aguilar, Julio. 2011. *Prueba Indiciaria y Presunción de Inocencia en el Proc. Penal*. España.

Coronado Salazar, Henry. *La Prueba Ilícita y la Prueba Indiciaria en el NCPP*. Perú. Versión Digital.

De la Cruz Ochoa, Ramón. 2004. *Crimen Organizado, Tráfico de Drogas, Lavado de Dinero y Terrorismo*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

de Trazegnies Granda, Fernando. *La Teoría de la Prueba Indiciaria*. Versión Digital.

Döhring, Erich. 1987. *La Prueba. Su Práctica y Apreciación*. La Habana: Ediciones MINJUS.

Gómez Orbaneja, Emilio y Vicente Herce Quemada. 1986. *Derecho Procesal Penal*. Madrid.

Gorphe, Francois. 1950. *De la Apreciación de las Pruebas*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Jur. Bosch y Cia.

Hernández Elvira, María Jesús. 2010. *La Prueba Indiciaria en el Proceso Penal*. Lanzarote.

Sentencia No. 158/11. Causa No. 122/11, Sala Segunda Tribunal Provincial Popular de La Habana (Caso Mariposa).

Thorwald, Jürgen. 1966. *El Siglo de la Investigación Criminal*. Cuba.

Vargas Valdivia, Luis G. *La Prueba Indiciaria y Contexto Histórico*. Versión Digital.

Zecenarro Mongel, Karla. S/A. *La Prueba Indiciaria en Delitos de Corrupción de Funcionarios*. Versión Digital.

40 Recomendaciones del GAFI del año 1990. Versión Digital.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

RAPPORT

El rapport es el fenómeno en el que dos o más personas sienten que están en “sintonía” psicológica y emocional (simpatía), porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí.

La palabra se deriva del verbo francés rapporter que literalmente significa llevar algo a cambio y, en el sentido de cómo las personas se relacionan entre sí significa que lo que una persona envía la otra lo devuelve. Por ejemplo, pueden darse cuenta de que comparten los mismos valores, creencias, conocimientos y conductas en torno al deporte, la política o cualquier temática.

TELEOLOGÍA

La teleología (del griego fin y discurso, tratado o ciencia) es la rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de las causas finales. Usos más recientes lo definen simplemente como la atribución de una finalidad, u objetivo, a procesos concretos.

SISTEMA HAWALA

El hawala, también conocido como hundi, es uno de los sistemas de transferencia informal de fondos (TIF) de un lugar a otro a través de proveedores de servicios conocidos como hawaladars, generalmente utilizados en muchas regiones del ámbito local e internacional. Hawala significa “transferencia” o “cable” en la jerga bancaria árabe.

Ciencias Penales 2018?

TALLER PRE-EVENTO

El tema central del Taller Pre-Evento, que se realizará el 13 de marzo, será la Economía cubana actual y delitos económicos.

En este espacio se debatirá acerca de los delitos económicos y las conductas asociadas a la corrupción, que constituyen una preocupación del Estado cubano y de los estudiosos y operadores del Derecho y de la Economía, que se relacionan con estos temas. Especialmente en el contexto actual en el que se implementan los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

Sesionarán los paneles No.1 (en la mañana): "Papel del Derecho en el proceso de transformaciones de la economía cubana actual" y el No.2 (sesión tarde): "Corrupción y delitos económicos", que estarán a cargo de prestigiosos profesores universitarios y profesionales del Derecho y de la Economía.

XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2018 Y II EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

Los principales ejes temáticos de este encuentro, que sesionará en el Palacio de Convenciones de La Habana, del 14 al 16 de marzo de 2018, serán:

- La trata de personas
- Prevención y enfrentamiento al tráfico de drogas y migrantes
- Delitos económicos y funcionariales
- Delincuencia transnacional y el ciberdelito
- Terrorismo
- Lavado de activos

- Crimen ambiental
- Tráfico ilegal de menores y explotación sexual
- La ejecución de la pena en las personas privadas de libertad
- La persona jurídica como sujeto del Derecho Penal. Retos actuales y futuros
- El Estado, la Sociedad y el Derecho en la lucha contra la corrupción
- El fortalecimiento del papel del control del Estado como garantía para mejorar la gestión pública, prevenir y aminorar las manifestaciones de corrupción
- El Ministerio Público y el Sistema Judicial en el enfrentamiento a la corrupción
- Organismos internacionales y las relaciones intergubernamentales en la lucha contra la corrupción
- Protección y atención contra la violencia en el seno de la familia
- Delitos relacionados con los niños y las niñas
- Explotación laboral del menor
- Relaciones paterno-filiales y función tuitiva del Estado
- Tutela Penológica de niños y niñas
- Leyes Migratorias y Minoridad
- El control de la legalidad como garantía de la seguridad jurídica de la ciudadanía.

Ambos encuentros se realizarán con el auspicio de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el Tribunal Supremo Popular, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.



What will we discuss in

Criminal Sciences 2018?

The Attorney General's Office of the Republic of Cuba announces the holding of the 14th International Meeting on Criminal Sciences 2018 and the 2nd Event on Legality, Law & Society, to be held at the International Conference Center (Palacio de Convenciones), Havana, Cuba, from 14 - 16 March 2018.

Both events will be sponsored by Cuba's National Union of Jurists, the University of Havana's Faculty of Law, the People's Supreme Court, the National Organization of Collective Law Practices and Cuba's National Association of Economists & Accountants.

KEY TOPICS • Human trafficking

- Prevention of and response to trafficking in narcotics and migrants
 - Financial crimes and corruption in officialdom
 - Transnational crime and cybercrime
 - Terrorism
 - Asset laundering
 - Environmental crime
 - Illegal trafficking in minors and sexual exploitation
 - Execution of custodial sentences
 - Criminal prosecution of corporate bodies.
- Current and future challenges

- The state, society and the law in the combating of corruption
- Reinforcement of the state's controlling role to underpin improvements in public administration, and to prevent and mitigate the manifestations of corruption
- The public prosecution service and the judicial system in the response to corruption
- International organizations and intergovernmental relations in combating corruption
- Protection against and response to violence within the family • Crimes relating to children of both sexes
- Exploitation of child labor
- Parent-child relations and the protective role of the state
- Guardianship of children in criminal cases
- Migration laws and laws regarding the legal age of majority
- Control of legality as a guarantee of the legal security of the citizenry.



NUESTRA HISTORIA

SABÍAS QUE...



- El 3 de enero de 1959, el presidente Manuel Urrutia Lleó, además de hacer pública la designación de Fidel Castro Comandante en Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, da a conocer el nombramiento del doctor Emilio Menéndez Menéndez como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y al doctor Felipe Luaces Sebrango como fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, devenido el primer fiscal designado tras el triunfo revolucionario, quien el 4 de febrero de ese año cesa en dicho cargo y es nombrado magistrado de la sala de garantías constitucionales y sociales del máximo órgano de justicia.

Es nombrado, para sustituirlo, el doctor Mario Fernández Fernández, el que a partir de aceptarse su renuncia, José Santiago Cuba Fernández es nombrado fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, el 19 de agosto de ese año.

- La Ley No.1, del 5 de enero de 1959, suprimió los tribunales de urgencia, aparato judicial que actuó dócilmente a favor de la tiranía, y disolvió la sala segunda de lo criminal del Tribunal Supremo Popular, que fueron instrumentos de represión al servicio de los regímenes reaccionarios.
- El 7 de febrero de 1959 se aprueba el nuevo texto constitucional, que modificó la parte orgánica de la Constitución de 1940, introduciendo algunos cambios sustanciales.

El Congreso bicameral (Senado y Cámara de Representantes) quedó eliminado, y sus facultades legislativas pasaron al Consejo de Ministros, que a su vez constituía, junto al Presidente de la República y el primer ministro (cargo que se mantuvo) el ejecutivo de la nación.

Con información del libro : *Aproximación a la historia de la Fiscalía General de la República*. Colectivo de Autores. 2015. pág 106- 108.



VÍA DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS



Puede contactarnos desde cualquier municipio o provincia del país.

Las 24 horas, todos los días.



EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD